

Capítulo 1

Calvario y resurrección de Lula da Silva

Colgada en lo alto de una colina al pie del mar, el verde exuberante de sus palmeras que ofrece un contrapunto refrescante a la blancura engalanada de azul, oro u ocre de sus iglesias y de sus casas, Olinda es una de las más preciosas perlas barrocas de la costa brasileña. Sin embargo, el centro histórico, con sus calles pavimentadas y sus residencias señoriales transformadas en propiedades de lujo, galerías o estudios de artistas, apenas representa el 10 % de la superficie urbana. La mayoría de sus 360.000 habitantes vive en los barrios modernos de la franja costera, sin que nada interrumpa el tejido urbano que la une con su vecina e histórica rival, Recife (1,4 millones de habitantes).

Este viernes de mediados de junio de 2006, a unos meses de las elecciones presidenciales a celebrarse en octubre, la región-capital del Estado de Pernambuco recibe a uno de los hijos más ilustres del terruño nordestino, el presidente de la República Luiz Inácio da Silva, nacido a unos doscientos kilómetros de ahí, en los confines del *sertão*,¹ cerca de la pequeña ciudad de Garanhuns. El objetivo de su visita es el mismo que el de sus frecuentes viajes al Brasil profundo, lejos de los despachos de vidrio y acero de Brasilia y de las orgullosas metrópolis del sur del país: inaugurar un proyecto de riego o de electrificación, anunciar un programa de crédito a los agricultores, resaltar los méritos de una política de transferencias sociales que a finales de 2006 llegaba a casi once millones de familias (más de 40 millones de personas) y recuperar sus raíces entre su pueblo con muchos abrazos, carcajadas y, de vez en cuando, unas lágrimas comunicativas. El presidente llora en público a menudo, muy a menudo según le critican las elites; el pueblo, en cambio, aprecia esas

1. Término que designa a la región semiárida del interior del nordeste brasileño.

efusiones sentimentales, sobre todo sus compatriotas del Nordeste, el 70 % de los cuales dice tener una opinión favorable de su mandatario.

Lula ha venido a Olinda a anunciar el inicio de un proyecto del Fondo Nacional de Vivienda de Interés Social (FNHIS), financiado a través de la Caixa Federal, uno de los grandes bancos públicos que los gobiernos precedentes destinaban a una privatización rampante y cuya reactivación caracteriza la opción «desarrollista» de su gobierno: se entregarán 74,9 millones de reales² a seis municipios de la región, a fin de realojar a sus habitantes en viviendas dotadas de agua potable y electricidad, pues 5.500 familias viven en barracas sobre pilotes, como muchos *favelados*³ en esta zona de manglares y terrenos pantanosos en la desembocadura del río Capibaribe y de sus ramales.

Entre aplausos y vítores, el presidente visita dos de esas favelas, identificadas únicamente por una letra y un número, la V-8 y la V-9, que bordean un ramal de nombre sumamente expresivo: el canal de la Malaria, cuyo saneamiento prevé el nuevo proyecto. Más tarde, en el discurso que pronuncia desde un estrado en el centro de Olinda, pide al ministro de las Ciudades que supervise de cerca la ejecución del proyecto: «Marcio, controla estas obras como si se tratara de la casa de tu madre». No obviará lanzar una pulla a sus adversarios y predecesores: «A los políticos no les gusta gastar dinero para canalizaciones ocultas bajo la tierra, porque no hay forma de colocar una placa a la gloria de su madre. Por eso prefieren construir puentes».

Durante este período preelectoral, los portavoces del gobierno y el propio Lula insisten frecuentemente en este aspecto de su balance: las inversiones en infraestructura de sanidad pública (aguas servidas, canalizaciones, etc.) han aumentado en un promedio de 281 %. «Pero ofrezcamos cifras reales —explicaba unos meses antes el presidente en una entrevista concedida al semanario *Carta Capital*—. Entre 1995 y 2002, la media del gasto del anterior gobierno en este terreno era de 474 millones de reales por año. La nuestra entre 2003 y 2004 asciende a 1,8 mil millones de reales por año, y acabamos de liberar 2,5 mil millones suplementarios, sin hablar de los 2 mil millones ya asentados en el presupuesto federal. La cantidad de dinero que estamos invirtiendo en algunos sectores es superior a la suma de todo lo que se ha hecho en la

2. Un euro equivale a unos 2,8 reales.

3. Habitantes de las favelas.

historia de Brasil, porque eso se consideraba como simple gasto. Mejorar estas infraestructuras significa mejorar la calidad de vida de las personas. Por cada real que se invierta en este área, se ahorra cuatro en materia de salud pública.»

Hacia el final de su discurso, Lula adopta un tono triunfalista: «Para concluir, os diré que Brasil está viviendo un momento realmente especial. Por primera vez, el pueblo satisface su hambre, los pobres pueden permitirse tres comidas al día: desayuno, almuerzo y cena. Por primera vez, nuestro pueblo, cuando va al supermercado, constata que los precios han bajado, incluso el material de construcción es ahora más barato, la gente se da cuenta de que Brasil es también su país, que Brasil no es solamente el país de las personas que viven en Brasilia, en el centro de Recife, de Rio de Janeiro o de São Paulo: Brasil pertenece también a los pobres de este país, hombres, mujeres y niños, sí, sobre todo a los hijos de los pobres, y ustedes saben muy bien que eso pone nerviosos a algunos.

»Cada día, hay alguien que me ataca, quizá porque hay una pregunta que les corroe: “¿Por qué este metalúrgico está logrando lo que nosotros, que gobernamos este país desde que Cabral desembarcó por primera vez en 1500, no hemos conseguido?”. Es sencillamente porque este obrero metalúrgico tiene algo que ellos no tienen, tiene carácter, y si está ahora donde está, no es gracias a la cantidad de diplomas ni gracias al apoyo de las elites políticas brasileñas, no, es gracias al sentimiento y al alma del pueblo de este país. A esas personas, que todos los días transpiran odio, envidia y prejuicios, no les voy a dedicar ni un minuto, quiero consagrar mi vida entera a ayudar al pueblo de los pobres de este país a vivir con dignidad y en condiciones decentes.

»Nuestra respuesta a aquellos que sólo tienen odio para darnos es más afecto, más trabajo, más amor al pueblo de este país, más alegría, porque lo que a ellos les convendría es que la gente estuviera tan nerviosa como ellos y cayera en su juego. Pero conmigo esos juegos no funcionan porque el pueblo no lo merece, el pueblo merece respeto, el pueblo merece que se lo trate con dignidad y por eso hoy estoy aquí. ¿Y ellos dónde están? Yo sí estoy con vosotros. Muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno de vosotros.»

El retorno del presidente fantasma

¿De verdad era ese el mismo Lula y sus compañeros, de quienes apenas un año antes el senador Jorge Bornhausen, uno de los principales líderes de la oposición, había declarado en pleno escándalo de corrupción que afectaba al Partido de los Trabajadores (PT) y al gobierno: «Estoy contento porque podremos librarnos de esta raza durante los próximos treinta años»? ¿Era ese el mismo hombre que presidía un gobierno al que uno de sus aliados, ultracrítico y reticente pero aliado al fin y al cabo, el dirigente del Movimiento de los Campesinos Sin Tierra (MST) Joao Pedro Stédile había dado por «acabado» en septiembre de 2005? Un gobierno tan acosado y desmoralizado que incluso su ministro de Educación, el antiguo alcalde de Porto Alegre Tarso Genro, manifestando un derrotismo sin precedentes, respondía entonces a un estudiante que le pedía un motivo para votar al PT que no tenía «ninguna buena razón que darle».

Al describir, a fines de 2005, el calvario que había vivido su partido y su gobierno como una «agonía prolongada», Flavio Koutzii, diputado petista en la asamblea del Estado de Rio Grande do Sul y dirigente nacional del PT, avanzaba un diagnóstico sin concesiones: «El gobierno ha asumido una línea programática fundamentalmente contraria, e incluso diametralmente opuesta, a aquella sobre la que desarrollamos nuestro trabajo, nuestro crecimiento y nuestras victorias a lo largo de los últimos veinte años. Los militantes la han percibido como la opción a favor de una política económica que ha mantenido algunos de los principales fundamentos macroeconómicos del gobierno anterior. Esta política ha sido aplicada de tal modo que sencillamente ha impedido, bloqueado o limitado las políticas sociales que esperábamos serían la característica dominante de este gobierno. Lo que hemos tenido es una política económica inaceptable y una política social extremadamente frágil. Cuando el escándalo estalló, en mayo de 2005, alcanzó a un gobierno que todavía gozaba de cierto prestigio pero cuya credibilidad estaba muy deteriorada en relación a las expectativas que suscitó su elección, con una intensa decepción en varios sectores, como la reforma de la seguridad social, o la falta de intervenciones firmes y valientes en áreas como la de los transgénicos o las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura, por citar sólo dos. Un gobierno que, por consiguiente, empezaba ya a debilitarse».

Los sondeos señalaban la degradación de la imagen personal del presidente, que había pasado de tener un 66,1 % de opiniones favorables en

febrero al 50 % en septiembre, luego al 46,7 % en noviembre, el nivel más bajo desde el inicio de su mandato en enero de 2003, cuando el 83,6 % de los encuestados tenía una imagen positiva de él. Según el 72,6 % de los interrogados, la imagen de Lula se había visto afectada por la crisis política hasta el punto de poner en entredicho su reelección. Para un 42,8 %, el presidente había participado en los actos de corrupción denunciados por los medios de comunicación y por la oposición, mientras que solamente un 41,3 % creía lo contrario. En diciembre, los resultados del gobierno eran considerados «malos» o «muy malos» por el 32 % de los encuestados, mientras que solamente el 29 % los consideraba «buenos» o «excelentes». Casi todas las encuestas daban a Lula como perdedor frente a su adversario de la derecha.

En agosto de 2005, frente a los rumores de *impeachment* del presidente que excitaban los espíritus animales del microcosmos político, el diario *Folha de São Paulo* entrevistó a uno de los más prestigiosos especialistas internacionales de Brasil, Thomas Skidmore, de la Universidad de Brown (Rhode Island, Estados Unidos). El historiador norteamericano, en completa sintonía con el humor de los medios de comunicación y de la oposición, no se anduvo con rodeos: «Lula es el presidente que nunca existió. Parecería que ha perdido toda capacidad para dirigir el país. Su imagen está irremediablemente empañada ante los ojos de la sociedad brasileña. Ya no es capaz de recuperar el control de la administración. De hecho, ya ha abandonado el poder. La tarea que todo el mundo debe emprender ahora es encontrar una manera de dirigir el país, dado que el presidente es un hombre hueco, un verdadero fantasma.

»Creo que lo razonable sería que los partidos de la oposición se pusieran de acuerdo para permitir que Lula continuase en la Presidencia, pero aislándolo y dejando que Brasil se gobierne solo. Lula no se interesa por los detalles de la gestión cotidiana. Es muy posible dejar en sus manos todas esas funciones ceremoniales que tanto le gustan, los viajes, los encuentros internacionales, y dejar que el gobierno gravite alrededor de personas adecuadas como el ministro de Economía, Antonio Palocci, quien debería ser el único sobreviviente de esta crisis.

»Por supuesto, el PT va a desintegrarse. Apenas sobrevivirá un pequeño grupo de idealistas y la tragedia de Lula quien, creo, verdaderamente no entiende qué está pasando en Brasil. El Brasil es un país muy dirigido por las elites. Todo ello va a fortalecer la tendencia a poner la política y el

poder en manos de personas muy experimentadas como el ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Él es el ejemplo perfecto: un hombre de buena familia, con mucha experiencia y que habla varios idiomas. Este tipo de individuos son los que saben dirigir el país. La sociedad no votará nunca más a un populista como Lula. Regresará nuevamente a personas confiables, que no son tan representativas del país pero que reflejan a una pequeña clase».

Menos de un año después, en lugar de desintegrarse, el PT había reconstruido su cohesión y aparecía en los sondeos como el partido político preferido de los brasileños. El muy ortodoxo ministro de Economía, Antonio Palocci, víctima a su vez de acusaciones relativas al período en que fue alcalde de Ribeirão Preto, cedió su puesto a Guido Mantega, partidario de una política presupuestaria menos restrictiva y del relanzamiento «desarrollista» de la economía. Las encuestas de popularidad señalaban a Henrique Cardoso como uno de los políticos más impopulares. Y Lula encabezaba los sondeos con un índice de aprobación del 60 %: 66 % entre los electores hombres, 67 % en las ciudades medianas, 68 % entre las familias más pobres, 69 % entre los menos escolarizados y más del 70 % en ese mismo Nordeste que un día abandonara siendo un niño paupérrimo para ir a vender naranjas y cacahuets en las calles de Santos y de São Paulo.

A pocos meses de las elecciones, las encuestas cualitativas encargadas por la Fundación Perseu Abramo, ligada al PT, confirmaban los resultados de los institutos de sondeos independientes. La voluntad de formar un buen gobierno era percibido como una virtud de Lula por el 62 % de los encuestados. Un 53 % aplaudía su valentía para hacer frente a las presiones y la sensación de confianza que transmitía. Un 44 % creía en su disposición a mantener sus promesas y en su nivel de preparación personal, y un 42 % subrayaba su autoridad de dirigente. En cuanto a las acusaciones de corrupción, su credibilidad había pasado del 45 al 27 % entre agosto de 2005 y abril de 2006, y la idea de que eran más falsas que ciertas de un 9 a un 22 %. Para un 38 % de los interrogados, las motivaciones de tales acusaciones eran esencialmente políticas. El nivel de corrupción era considerado muy elevado por un 55 % de los encuestados, pero el 79 % estimaba que venía de antes —es decir, desde mucho antes que el gobierno petista—, y solo un 17 % aseguraba que había aumentado en el mandato de Lula, pese a que esta era la tesis principal que difundían incansablemente la oposición y los medios de comunicación desde mayo de 2005.

El 20 de octubre de 2006, tres semanas después de una primera vuelta algo más difícil de lo previsto, Luiz Inácio da Silva era triunfalmente reelegido por 58,29 millones de brasileños (60,83 % de los sufragios válidos), superando en más de 20 millones de votos a su adversario Geraldo Alckmin (39,21 %). Lejos de hundirse, el PT recuperaba el 90 % de los escaños obtenidos en 2002 y seguía siendo la segunda fuerza política del Congreso, a escasos escaños del gran partido centrista multiusos, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). En las regiones más pobres del país, Norte y Nordeste, Lula recogía casi siempre cerca de un 80 % de los votos. El eslogan de las últimas manifestaciones de campaña, «*Deixa o homem trabalhar*» («Déjale trabajar»), había conquistado el corazón del pueblo.

La crisis del mensalão

Pero ¿qué había ocurrido? Y en primer lugar, ¿qué hay que pensar de un escándalo de corrupción que, según la oposición, sería la expresión de la peor catástrofe moral de la historia republicana del país, mientras que para el periódico *The Economist* —del que es imposible sospechar ningún tipo de simpatía por el PT—, ironizando sobre la histeria justiciera de la derecha brasileña, el asunto se reducía realmente a «algunos islotes de hechos en un mar de conjeturas»?

Todo empezó el 14 de mayo de 2005, cuando se difundió un vídeo que mostraba a un director de los correos brasileños, Mauricio Marinho, recibiendo un soborno de más de mil dólares. Marinho declaró que actuaba con la aprobación del presidente del Partido Laborista Brasileño (PTB), Roberto Jefferson, una formación sin mucha consistencia ideológica aliada del gobierno. Entrevistado el 6 de junio por el diario *Folha de São Paulo*, Jefferson acusó al tesorero del PT, Delúbio Soares, de haber pagado sobornos mensuales de 12.000 dólares a varios diputados de otros dos pequeños partidos de derecha, el Partido Liberal (PL) y el Partido Progresista (PP), a cambio de su apoyo en el Parlamento. Se creó una Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI); Jefferson insistió en sus acusaciones, organizó un auténtico espectáculo permanente en la Cámara de Diputados y en los medios de comunicación, convirtiéndose en un héroe de la oposición. Sus acusaciones sin pruebas tangibles contra el superministro encargado de la coordinación del gabinete, José

Dirceu, antiguo líder guerrillero, eminencia gris de Lula, gran ingeniero de almas del aparato del PT y gran orquestador de las alianzas gubernamentales, provocaron su renuncia el 16 de junio.

Secundado agresivamente por los medios de comunicación, en particular por el semanario *Veja*, Jefferson acusó entonces al publicista Marcos Valério de ser el pivote central del sistema conocido como *mensalão*, que supuestamente pagaba el PT a algunos de sus aliados.

Ni estas acusaciones ni las tres CPI (sobre correos, compra de votos de parlamentarios y corrupción en las empresas del Estado) promovidas por el Parlamento lograron demostrar la existencia de ese sistema de sobornos mensualizados, al que se atribuía un destino cuanto menos curioso. De los diecinueve diputados a quienes señalaba el dedo acusador de los investigadores congresiles por supuestamente haberse beneficiado, siete eran miembros del PT. Podemos preguntarnos por qué motivo habría que pagarles para que voten según las indicaciones de su propio partido. Otro supuesto beneficiario, el representante del Partido del Frente Liberal (PFL, oposición de derecha), Roberto Brant, nunca votó a favor del gobierno. Los once restantes eran miembros de partidos pequeños, aliados más o menos oportunistas del PT, pero de ningún modo suficientes para garantizarle una mayoría en la Cámara.

En cambio, la existencia de vínculos económicos entre el PT y las empresas de Marcos Valério no tardaría en quedar ampliamente documentada, provocando a principios de julio la dimisión del secretario general del partido, Silvio Pereira; de su tesorero, Delúbio Soares, y luego de su presidente, José Genoino. El publicista encargado de la campaña presidencial de Lula en 2002, Duda Mendonça, reveló que el PT pagó sus servicios en una cuenta abierta en las Bahamas. El PT, que se confesó acorralado por el endeudamiento, reconoció haber creado una caja negra de campaña de casi 21 millones de euros. El primer resultado del escándalo fue que el núcleo duro del gabinete se derrumbó, provocando una reorganización ministerial urgente, el partido estaba paralizado, sus militantes enojados, la oposición olía la sangre y acariciaba el sueño de acabar con Lula a la mitad de su mandato.

A lo largo de su historia, el PT siempre se había presentado como dueño exclusivo de la virtud frente a un paisaje político marcado por una corrupción generalizada. El prestigio moral de muchos de sus cuadros y dirigentes radicaba tanto en su pasado de lucha contra la dictadura como en su reputación, casi siempre justificada, de transparencia y de «buen

gobierno» de los municipios petistas. Pero en un país donde las elecciones cuestan mucho, incluso más que en Estados Unidos, y donde el dinero fácil de los financistas públicos o privados corre a chorros y condiciona todas las candidaturas de peso, no hay excepción moral que aguante. Estamos lejos de la inocencia militante de los orígenes: los gastos oficiales de campaña del partido de Lula aumentaron en un 1.300 % entre las elecciones de 1998 y las de 2002. ¿Quiere eso decir que necesariamente debía sucumbir al esquema de captación de fondos organizado por Marcos Valério, y del que, paradójicamente, se ha demostrado que fue inaugurado por los partidos de la oposición en el Estado de Minas Gerais?

Según el testimonio del economista César Benjamin, quien abandonó el PT en 1995, al menos desde 1994 algunos sectores informales del aparato dirigente petista gestionaban «recursos paralelos» con una completa falta de transparencia contable y política. Una mirada fría al contexto de la victoria de Lula permite, no obstante, relativizar las reacciones simplistas cargadas de moralismo barato. Si el ex metalúrgico ganó las elecciones presidenciales con un 61,3 % de los votos, el PT por su parte solamente controlaba el 18 % de los escaños (91 de 513 diputados) en un Parlamento donde otros 24 partidos, sin Dios ni ley, se disputan favores, empleos y recursos públicos. En este inmenso país de estructura federal, en cada elección están en juego más de 20.000 cargos administrativos, sin hablar de otras decenas de miles a nivel de Estados y municipios. Preocupados por disponer de un margen de maniobra suficiente para llevar a cabo sus proyectos políticos, el PT controlaba aproximadamente un 75 % de los cargos clave, lo que hacía poner el grito en el cielo a la derecha, a los medios de comunicación y a los aliados circunstanciales del centro y del centro-derecha del gobierno, quienes exigían tácitamente su parte del pastel. De ahí que constantemente se denunciara, sin ningún temor a hacer el ridículo, la confiscación «totalitaria» del aparato del Estado por el partido de Lula.

En tales circunstancias, gobernar de manera mínimamente eficaz, hacer que se aprueben leyes y mantener una coalición estable constituye un verdadero rompecabezas. Algunos sugieren que es esta lógica infernal la que en buena medida explica los percances del PT, algunos de cuyos dirigentes habrían adoptado de manera bastante imprudente una estrategia lenino-maquiavélica al servicio de su proyecto reformista moderado. Aparentemente, para José Dirceu y algunos de sus principa-

los colaboradores, la realización de objetivos clave como ganar las elecciones, construir una mayoría parlamentaria viable y organizar una hegemonía político-electoral duradera en una sociedad tan heterogénea en los planos sociológico y territorial como el inmenso Brasil, justificaba plenamente el uso de métodos poco ortodoxos, como las cajas negras. Dirceu, por su parte, hablaba de linchamiento político indiscriminado y clamaba su inocencia. Es posible que, a fin de cuentas, esta última sea técnicamente corroborada y, si bien ha sido expulsado del Parlamento, judicialmente no ha sido inculpado. Como mínimo, su pragmatismo maniobrero sin límites propició claramente incontrollables derivas. En cuanto a averiguar si Lula «sabía», aunque moral y jurídicamente pertinente, la pregunta resulta casi frívola políticamente hablando: si sabía, es cómplice; si no, su liderazgo queda seriamente cuestionado.

Lo que sigue siendo sorprendente, incluso desde la más cínica *realpolitik*, es que los dirigentes petistas implicados hayan podido mostrarse tan ingenuos. Al margen de toda consideración ética, no es muy difícil entender que resulta extraordinariamente peligroso para un partido de izquierda comprometerse en complejos esquemas de alianzas y de negociaciones secretas con la estirpe de políticos de dudosa virtud que son uno de los principales pilares del sistema político brasileño. Conviene saber que en Brasil, en promedio, un tercio de los diputados se cambia de partido al menos una vez durante su período. Un cuarto lo hace más de una vez. Este fenómeno es bastante frecuente en buena parte de Latinoamérica. Los brasileños tienen incluso una palabra para designar a los partidos sin proyecto ni definición ideológica clara que viven en lo esencial del parasitismo del aparato de Estado, del clientelismo o de la venta de su cuota de poder y de representación al mejor postor: hablan de partidos «fisiológicos», que se contraponen a las organizaciones más ideológicas. No es posible, por lo tanto, contar con la lealtad a largo plazo, siquiera por un lapso tan breve como un mandato presidencial, de esas mafias versátiles y de sus curtidos negociadores. Estos últimos no tienen ninguna razón ideológica ni corporativa para proteger a los ingenuos —y tanto más ingenuos porque tal vez se creen verdaderos Clausewitz de la maniobra política— que tratan con ellos creyendo tener la situación perfectamente bajo control.

Entre las causas de la ceguera estratégica de un sector del núcleo dirigente petista podemos quizás encontrar el delirio de omnipotencia que con tanta facilidad afecta a todos cuantos se acercan al corazón del

poder, así como el ambiente embriagador, sobre todo para los cuadros militantes de origen obrero o pequeñoburgués, del microcosmos de la alta política, con sus restaurantes de lujo, sus hoteles de cinco estrellas, sus *jets* privados, sus pequeños «obsequios» y la tentación del dinero fácil que la acompaña. Sea como fuere, fue un duro impacto para el partido de izquierda más grande de América y, probablemente, también del planeta (si se exceptúa, por razones de legitimidad democrática evidentes, el Partido Comunista Chino). Nacido en 1980 de la convergencia entre sindicalismo obrero, movimientos sociales urbanos y rurales, comunidades de base cristiana e intelectuales críticos, con más de 800.000 afiliados y varios millones de simpatizantes, el PT representó durante veinticinco años una inmensa esperanza, no solamente para amplios sectores de la sociedad brasileña, sino también para millones de militantes y de ciudadanos progresistas del mundo entero. Mientras que los dos primeros años de gestión de Lula dejaron a muchos militantes y simpatizantes petistas insatisfechos, el hundimiento del aura de superioridad moral de su partido constituyó para ellos una catástrofe sin precedentes.

Todos los que llegaron a la conclusión, desde al menos 2003, de que el PT había traicionado su proyecto histórico consideraban, con razón o sin ella, que el escándalo confirmaba ampliamente su pronóstico. A finales de 2005, se les sumaron varios miles de cuadros y de militantes y la media docena de parlamentarios que, entre las dos rondas de elecciones internas de septiembre y octubre, decidieron abandonar su organización para afiliarse al Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fundado en 2003 por los primeros congresistas disidentes expulsados del PT, la senadora Heloisa Helena y los diputados Luciana Genro y Baba. Por su parte, la mayoría de militantes y de simpatizantes del PT, que cuestionaba en voz baja o aceptaba a regañadientes la justificación de la política económica restrictiva y ultra-ortodoxa de Antonio Palocci y Henrique Meirelles (director del Banco Central), debido a la vulnerabilidad externa del país y a los peligros de desestabilización macroeconómica, se sentía profundamente decepcionada y frustrada. Denunciando el secuestro del partido por un aparato paralelo carente de brújula moral, uno de los vicepresidentes nacionales del PT, Valter Pomar, señalaba que si no se producía una reacción vigorosa y adecuada, «nos arriesgamos a vernos apartados del poder de una manera tan desmoralizante que la izquierda brasileña podría verse neutralizada como fuerza activa de transformación durante varias décadas». Tanto en los debates internos como en las intervencio-

nes exteriores de los principales cuadros dirigentes e intelectuales del partido, prevalecían nítidamente las voces autocríticas que asociaban al deseo de conservar el patrimonio ético y político del PT, la voluntad de (re)democratizar su funcionamiento interno y de fortalecer su autonomía con respecto al gobierno.

La cabeza fuera del agua

La crisis tuvo al menos el mérito de estimular el debate. La cuestión del balance de gobierno y la de su relación con la catástrofe política y moral que se estaba viviendo suscitaban en el seno del PT un abanico de opiniones extremadamente variadas, que iban desde una defensa a veces no muy convencida hasta las críticas más feroces. Según los más ortodoxos, la «herencia maldita» de la gestión desastrosa de Fernando Henrique Cardoso, quien aumentó considerablemente el endeudamiento y la vulnerabilidad externa del país, justificaba la austeridad presupuestaria y los límites que ésta imponía a la política social y a la reactivación de la producción nacional.

De hecho, muchos expertos estimaban que Brasil se encontraba en 2002 al borde de una crisis de dimensiones catastróficas al estilo argentino. En vísperas de la investidura de Lula, señala Marco Aurélio Garcia, dirigente histórico del partido y consejero especial de la Presidencia, el dólar estaba a 4 reales (contra 2,15 en febrero de 2006), el déficit de la balanza de cuentas corrientes era de 38 mil millones de dólares, el nivel de «riesgo país» de 2.400 puntos y la inflación subía aceleradamente. «Mucha gente apostaba que este gobierno de izquierdistas tendría que enfrentar una inflación del 10 % y que eso sería el caos, con lo que quedaría demostrado que la izquierda es incapaz de gobernar.»

Ciertamente, la mayor o menor reticencia con que los militantes aceptaban una ortodoxia ultraprudente, que en ocasiones superaba las recomendaciones del FMI, se veía respaldada por otros factores a más de la mera lealtad al partido. La recuperación del crecimiento y del empleo, y los notables éxitos del comercio exterior, habían convencido a muchos de que el gobierno iba por el buen camino al apostar por la estabilidad y la credibilidad macroeconómicas. Otros hacían hincapié en la política exterior progresista y en la promoción de una serie de programas sociales innovadores. Pero la estabilidad macroeconómica, el control de la

inflación y el descenso del nivel de «riesgo país» no bastaban para ilusionar a una base petista que, como señalaba Tarso Genro, había dejado de «apasionarse» por su gobierno. Unos días antes de ser nombrado presidente interino del partido, Genro explicaba en un artículo del diario *Folha de São Paulo* que el PT carecía de «un programa que pueda ayudar al gobierno en materia de propuestas para la transformación de la realidad brasileña. No hemos logrado formular una alternativa que despierte los mejores sentimientos de solidaridad y de humanismo, proscritos por el economicismo neoliberal. Hemos avanzado, pero estamos bloqueados a medio camino, no entre el progresismo y la socialdemocracia, sino entre el progresismo moderado y un neoliberalismo teñido de falsa modernidad». El PT había subordinado su programa «al relativismo del mercado financiero» y «necesita[ba] una reforma política, programática y un cambio de métodos de dirección para poder asumir nuevamente sus responsabilidades con respecto a Brasil y a la democracia». Para Genro, el PT enfrentaba «dos tipos de transición: la primera llevaría esencialmente a una negociación con el sistema de poder anterior; mi opción, en cambio, es aquella de una transición con ruptura».

Al final no se impusieron ni la ruptura ni la continuidad total, pero la crisis sacó a la luz la notable resistencia de un partido al que los medios de comunicación y los políticos de derecha, a principios del tercer trimestre de 2005, describían con descarado alborozo como moribundo. La verdad es que la dirigencia petista daba señales bastante contradictorias. Del lado del gobierno, la renovación parcial del gabinete no parecía inaugurar el nuevo derrotero económico que reclamaba la mayoría de las bases y los movimientos sociales. Algunas designaciones para cargos ministeriales parecían responder a la exigencia de acuerdos «fisiológicos» con los aliados de centro y de centroderecha, como si se quisiera calmar sus veleidades de entrar en la danza de acusaciones. Estas tendían a confirmar la hipótesis de un gobierno aún más «descafeinado» y sometido a los intereses conservadores. La imagen de Lula, que declaraba sentirse «traicionado» por algunos miembros de su entorno y pedía públicamente perdón al pueblo brasileño, se había deteriorado seriamente, sobre todo entre las clases medias. La bonachonería plebeya y la pedagogía sentimentalista que constituyen el registro preferido del jefe de Estado distaban mucho de proyectar la sensación de energía y de autoridad que las circunstancias requerían, y en lugar de eso parecían la expresión de una compulsión de repetición algo sonámbula. Un humo-

rista satírico afirmó entonces que Lula había «abandonado el petismo por el autismo».

Sin embargo, después de una fase inicial de profundo desaliento, la ofensiva feroz de la derecha terminó provocando un paradójico efecto de removilización. Durante los primeros meses de la crisis, los principales portavoces e intelectuales del PT parecían petrificados en su silencio. En una resolución publicada el 16 de agosto de 2005, la dirección petista pedía disculpas al país por las graves irregularidades que algunos de sus dirigentes habían cometido «a espaldas de las instancias formales del partido», prometía la total transparencia en las investigaciones externas e internas, un castigo ejemplar para los culpables y la reconstrucción democrática de los mecanismos de dirección y de las relaciones entre el gobierno y el PT. Por otro lado, defendía el resultado global del gobierno al tiempo que proponía más inversiones sociales, mayor crecimiento y más redistribución salarial «sin comprometer la estabilidad macroeconómica». En definitiva era un texto de compromiso que intentaba canalizar el enorme malestar interno pero sin arriesgarse a cuestionar la adhesión del PT a la línea del gobierno.

No obstante, el despido o la renuncia de varios dirigentes, el nombramiento como presidente interino de Tarso Genro, una personalidad dotada de cierto prestigio histórico, intelectual y moral, pero sin vínculos directos con el núcleo dirigente del «ala mayoritaria» (constituido por la derecha y el centro del partido), demostraba una cierta voluntad de transparencia y de renovación. Las elecciones internas organizadas en septiembre y octubre de 2005 aportarían las pruebas de la vitalidad democrática de una organización a la que se seguía tachando de desacreditada y desmoralizada. Más de 300.000 militantes (40,7 % del total) se movilizaron para renovar la totalidad de las instancias locales y nacionales del PT, es decir, mucho más que el quórum del 15 % que señalaban los estatutos. Era una tasa de participación inconcebible en otros partidos brasileños (y no solamente brasileños) y claramente excepcional para una organización a la que se calificaba de agonizante. La fase de parálisis estaba superada y pronto la esperanza volvería a cambiar de cancha. Sin dejar de reclamar la máxima transparencia ética y un castigo ejemplar para los culpables de malversación, varios dirigentes petistas empezaron a denunciar públicamente un intento de *putsch* mediático-parlamentario. Era una opinión compartida por los principales portavoces de los movimientos sociales independientes del PT, incluidos los más críticos con el gobierno, como el poderoso MST.

Para la derecha y los sectores de la oligarquía tradicional, aseguraban, lo poco que había hecho el gobierno de Lula para empezar a cambiar Brasil ya era demasiado. La suspensión de las privatizaciones de los grandes sectores estratégicos como el petróleo, la relación no represiva y relativamente fluida del gobierno — pese a las tensiones y a las contradicciones reales— con los movimientos sociales eran continuamente denunciadas con furor por los medios de comunicación dominantes. La perspectiva de consolidación social y electoral a medio y largo plazo de un proyecto de transformación de las estructuras políticas, económicas y sociales del país, aunque fuera una versión moderada y conciliadora, era una verdadera pesadilla para las elites tradicionales. Sin olvidar su preocupación, que Washington compartía, ante la creación de una alianza político-económica entre Caracas, Brasilia y Buenos Aires, sobre la base de una integración económica regional comenzando por los países del litoral atlántico del continente, mediante la construcción masiva de infraestructuras de desarrollo y la consolidación de estrategias políticas y comerciales convergentes.

Aunque estaba dividida sobre lo oportuno de poner en marcha un mecanismo parlamentario de *impeachment* del presidente, el objetivo mínimo de la oposición conservadora era debilitar y «desangrar» a Lula hasta las elecciones de 2006, y sobre todo aniquilar por completo la legitimidad y las potencialidades del PT. Pero, lejos de provocar la desbandada generalizada que esperaba y pese a notables deserciones como la del viejo dirigente católico de izquierda Plinio Arruda Sampaio o del ex ministro de Educación Cristovam Buarque, la ofensiva feroz de la derecha y de los medios de comunicación provocó un estrechar filas de la izquierda progubernamental. Un crítico severo de la gestión de Lula, el periodista Emir Sader, explica bien por qué. Según Sader, el ensañamiento de la derecha contra el régimen desmentía la idea que sostenían algunos, como los militantes del PSOL, de que Lula estaba presidiendo en realidad el «gobierno de la nueva derecha»: «Los que defienden esta tesis son incapaces de explicar por qué la derecha ataca de manera tan virulenta al gobierno. Los que confunden el gobierno de Fernando Henrique Cardoso con el de Lula no pueden entender por qué la derecha unida preconiza el regreso de la coalición [presidida por Cardoso] entre el Partido Socialdemócrata de Brasil y el Partido del Frente Liberal (PSDB-PFL). Política exterior, educación y política cultural, ahí tenemos al menos tres puntos de ruptura con la política liberal y proes-

tadounidense de la administración de Cardoso. Lo que la derecha unida desea no es tanto la debacle del gobierno como el hundimiento de la izquierda y de sus aspiraciones históricas a largo plazo. La izquierda debe saber que, incluso si las cosas van mal con Lula, serían mucho peor sin él. Esto se traduciría en un retorno a la política de servidumbre frente a la hegemonía imperial estadounidense, con todas sus graves consecuencias para Brasil, América Latina y los países del Sur, con el regreso a la privatización de la educación, de Petrobras y del Banco de Brasil».

Viejos tiburones y paladines de la virtud

La crisis contribuyó poderosamente también a revelar el funcionamiento del sistema político y de los medios de comunicación brasileños. Denunciando el sensacionalismo apocalíptico y muy sesgado en el tratamiento de los escándalos por parte de la prensa, el jurista Dalmo Dallari declaraba en una entrevista concedida a la revista *Fórum*: «Cuando este tipo de prácticas eran cosa habitual del gobierno de Fernando Henrique, los medios nos lo informaron sin presentarlo como una tragedia nacional. Pero cuando se trata del gobierno de Lula, nos lo describen como si fuese el fin del mundo». Hay, en efecto, algo surrealista en ver a viejos tiburones de la política brasileña, que han sobrevivido a escándalos de corrupción mucho más graves, erigirse en vestales de la moralidad republicana.

Un caso emblemático es el de uno de los principales barones de la derecha, o mejor dicho un «coronel», como se designa en Brasil a los caciques semif feudales de provincia, particularmente en el Nordeste: el senador Antônio Carlos Magalhães, llamado «ACM», uno de los más agresivos fiscales del gobierno.⁴ Durante los incidentes violentos provocados por la tentativa de un grupo de campesinos sin tierra, miembros de un movimiento rival del MST, de invadir la Cámara de Diputados en junio de 2006, este dirigente del PFL no vacilaba en apelar a los militares en plena sesión del Senado: «Y yo pregunto: ¿dónde están las fuerzas armadas de Brasil? Las fuerzas armadas no pueden permanecer mudas. ¿A quién van a obedecer esos comandantes? ¿A un subversivo? Y estoy

4. Antônio Carlos Magalhães falleció en julio de 2007, seis meses después de la redacción de este capítulo. Su hijo le sucedió en el Senado.

hablando de comandantes porque hoy el ministro de Defensa ya no defiende nada ni a nadie. Reaccionen mientras aún estemos a tiempo. Antes de que el desdichado Brasil caiga en manos de una dictadura sindical presidida por el hombre más corrupto que haya accedido nunca a la presidencia de la República».

Es verdad que ACM, conocido como el «emperador de Bahia», Estado del que fue su gobernador durante veinte años, inició su carrera ofreciendo sus buenos y leales servicios a la dictadura militar. De ese modo empezó a acumular un capital político que le permitió crear una impresionante red de empresas de construcción monopolizando los contratos públicos antes de incursionar en los medios de comunicación, iniciativa posible gracias a su paso muy oportuno al mando del Ministerio de Educación. Los directivos de muchas de las firmas fundadas por ACM son parientes y amigos de la amplia y próspera familia Magalhães. Entre otros episodios dudosos, su trayectoria queda ilustrada con el desvío de fondos públicos, operaciones de blanqueo de dinero y la fuga ilegal a Jersey de 6,8 millones de reales. Virtuoso de la sobrefacturación, es conocido por haber construido en São Paulo la «avenida más cara del mundo». No contento con haber levantado un imperio económico sobre la base de una oportuna sinergia entre el dinero público y los negocios familiares, el senador bahiano es un personaje autoritario y vengativo que siempre se las ha ingeniado para intimidar o marginar a sus adversarios. Capaz de hacer desaparecer de los quioscos de Bahia la edición completa de una revista que cometió la impertinencia de husmear en sus negocios, es especialista en acumular expedientes comprometedores. También practica el espionaje: en 2003 se descubrió que había sometido a escucha telefónica a 232 personalidades del mundo político, del sector privado y de la prensa, a las que consideraba sus enemigos en negocios, en política e incluso en el amor. Pese a que la estrella de ACM palideció hace algunos años a causa de la acumulación de denuncias y de investigaciones, sus talentos le permitieron regresar al primer plano durante la crisis del *mensalão*. No existe nadie más capaz que un político depravado para acumular con conocimiento de causa los *dossiers* de corrupción sobre adversarios políticos. ¿Quién si no un virtuoso en el arte de sofocar las comisiones de investigación parlamentarias en los tiempos de Cardoso estaría mejor situado para maniobrar en sentido inverso, para saber atizar el fuego nutrido del bombardeo mediático y parlamentario contra el gobierno de Lula?

Ahora bien, ¿cómo funciona en concreto la máquina de crear escándalos? Y sobre todo ¿cómo ha podido minimizar las pérdidas en las filas de la oposición y focalizar los disparos sobre el gobierno, el PT e incluso sobre los movimientos sociales —pues los CPI también dirigieron sus pesquisas hacia el MST, la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), cercana al gobierno, los contratos de servicios firmados por los movimientos sociales y las ONG progresistas, en busca del menor indicio de irregularidad contable susceptible de desacreditarlos? ¿Cómo pudo transformar en un océano enfurecido el «mar de conjeturas» al que se refería con sarcasmo *The Economist*?

En un apasionante reportaje publicado en septiembre de 2005 por la revista *Caros Amigos*, la periodista Marina Amaral nos ofrece algunas pistas sobre la lógica de la formación de la opinión pública durante la crisis del *mensalão*, así como del sistema político brasileño en su totalidad. El hombre al que retrata vive en un lujoso apartamento de un barrio elegante de una metrópoli brasileña. Él se define como «gestor de crisis, consultor de medios de comunicación y lobbista». ¿En qué consiste específicamente su trabajo? En producir información satisfactoria para los intereses de sus clientes, políticos o empresarios (a veces representados por bufetes de abogados o agencias de publicidad), que tratan de promover o de consolidar su imagen pública, o bien de combatir el impacto de una publicidad negativa. Su reputación de hombre extraordinariamente bien informado es la clave de su éxito entre los periodistas, para quienes se ha convertido en una fuente insoslayable. Proporciona exclusivas y pistas de reportajes, hace circular «fichas» sobre personalidades en boga, ofrece un ángulo inédito sobre el último tema de moda en los medios de comunicación y transmite por correo electrónico comunicados favorables a los intereses de sus clientes para 90.000 destinatarios, todo ello mediante direcciones anónimas y a través de servidores extranjeros. La escasa credibilidad del anonimato se ve compensada en este último caso por la circulación exclusiva de informaciones ya publicadas por los medios de comunicación más respetados. «Le garantizo que eso da unos resultados espectaculares.»

Y así explica las reglas del juego: «Cada fuente periodística es un lobbista en potencia, y cada actividad de *lobbying* implica grandes riesgos económicos. La fuente hace circular información porque es la mejor manera de orientar la cobertura mediática, ya sea al servicio de sus clientes o de sus propios intereses. Los llobistas más importantes son los políti-

cos. Los senadores Jorge Bornhausen y Antônio Carlos Magalhães (los dos grandes caciques del PFL), que se cuentan entre las fuentes más importantes de los periodistas políticos brasileños, defienden intereses económicos y no solamente políticos. Bornhausen trabaja para la Federación Brasileña de Bancos, ACM defiende sus empresas de construcción. La información es la moneda de intercambio con el periodista. La fuente no puede mentir o pasar información no confirmada sin sugerir que no es confiable al cien por cien. Por su parte, el periodista no puede revelar nunca cuál es su fuente. Es una relación de confianza mutua. Y luego un buen día, el periodista escucha: «Necesito que me hagas un pequeño favor». Eso quiere decir que la fuente necesita «plantar» una información en los medios, una información que puede perfectamente ser una verdad a medias, o una mentira a medias. El periodista decidirá qué hacer».

Los periodistas que están mejor «sintonizados» con sus fuentes confidenciales tienen el privilegio de ser los primeros en recibir los mensajes más «candentes», los que anticipan escándalos y navegan entre el universo del rumor y el de la información. Se trata por lo demás de mensajes «cifrados» destinados a advertir a tal o cual político, a tal o cual empresario, de que uno de sus enemigos no le quita ojo. «Cuando leo los periódicos, enseguida me doy cuenta de quién trabaja para quién, quién ha “plantado” una información contra quién. Uno de los peores errores del PT es que algunos de sus dirigentes empezaron, a su vez, a “plantar” informaciones contra tal o cual coideario y rival dentro del partido. Y así es como han presentado un flanco débil a la ofensiva de los medios de comunicación, pues creían tener a su disposición a personas a las que en realidad no controlaban en absoluto.»

Pero ¿y cómo recaba él la información? «Trabajo principalmente con un círculo de amigos. Entré en la política a los dieciocho años, fui asistente parlamentario y secretario de un ayuntamiento, participé en numerosas campañas electorales. ¿Tiene idea del número de expedientes que circulan durante una campaña? Las elecciones pasan, pero las carpetas quedan, y se termina aprendiendo cosas un poco sobre todo y sobre todos. He trabajado también para la prensa y para grandes empresas, hace décadas que acumulo *dossiers*. Conozco a todas las personas interesantes, frecuento los lugares donde hay que estar, puedo hacerle una ficha sobre quienquiera cuando usted quiera. Sé exactamente a quién hay que llamar en cada caso.» Mientras el entrevistado se jacta de su

profesionalismo ante la periodista, no deja de recibir llamadas telefónicas a tres móviles distintos. Prácticamente todas las llamadas aluden al escándalo del *mensalão* y el «gestor de crisis» prodiga información abierta o codificada, estimula los rumores, señala las «gargantas profundas» potenciales a las que pueden dirigirse los periodistas deseosos de atizar el fuego: la amante de fulano, la secretaria de mengano, la ex esposa de zutano... «La máquina está en marcha, Lula va a caer, confía en mí», asegura a sus interlocutores.

Pero ¿cree en realidad en la corrupción del gobierno petista? «Todo gobierno es corrupto; es imposible ganar las elecciones sin una caja negra de campaña y cuando estás en el poder puedes alimentarla con el dinero del Estado, esencialmente a través de tres canales: las obras públicas, la publicidad y la informática. La edad de oro de las empresas de la construcción fue la dictadura militar. Perdieron espacio con las privatizaciones y con la disminución de las obras de infraestructura, por eso se han reconvertido a los servicios; de ahí la proliferación de escándalos relacionados con la recolección de basura en tantos municipios. Pero hoy el grueso del dinero viene de los contratos de publicidad.»

Si todos los gobiernos son corruptos, ¿por qué ensañarse especialmente con el de Lula ya que, según confiesa el entrevistado, pierde dinero trabajando gratuitamente «para ayudar a derribar al gobierno»? La respuesta es pasmosa: «Porque Lula es una gran decepción: no ha hecho nada por los pobres, se ha vendido al FMI. Quizás usted no me crea; aunque yo sea de derechas defiendo la necesidad de que exista un partido de izquierdas, un partido fuera del sistema, como lo era el PT antes de llegar al poder.

»Por supuesto que el PT ha robado mucho menos que los otros gobiernos. Los miembros del gobierno de Fernando Henrique Cardoso eran capaces de ganar tres veces más en una sola operación. Cada vez que el gobierno anunciaba la privatización de una empresa estatal, el ministro de Comunicación Sergio Motta informaba de que se la subastaría al mejor postor, sus acciones aumentaban vertiginosamente y los iniciados se deshacían de sus acciones (que habían comprado justo antes del anuncio oficial de la venta) ya el primer día de la subida. No esperaban más tiempo para no correr el riesgo de ser atrapados en flagrante delito. Esos tipos sabían qué hacían. El PT no, el PT no sabe robar y no debería hacerlo. La izquierda tiene que ser franciscana, no puede dejarse corromper. Debe actuar como los partidos comunistas europeos; debe

administrar los ayuntamientos y permanecer en la oposición. Cuando se quiere gobernar el país, hay que conocer el sistema, tener verdaderos aliados, ser cómplice de toda una serie de tráfico. El PT no sabe manejarse: gente como Delúbio (Soares, ex-tesorero del PT), un patán provinciano, un sindicalista militante, o como Silvinho (Silvio Pereira, ex secretario general), que ni siquiera sabe hablar portugués decentemente. ¡Son unos aficionados! Hay que dejar todo eso a los profesionales de la derecha, a los José Sarney, a los ACM, a los Sergio Motta. Los petistas se lo buscaron. No merecen que se les tenga confianza, son bolcheviques, roban por la causa. Desde luego, algunos roban para enriquecerse personalmente pero no es su principal motivación, creen que están más allá del bien y del mal, que tienen el monopolio de la ética. Son arrogantes, tratan a todo el mundo como si ellos fuesen mejor que los otros, se lo merecían».

La deriva de los medios de comunicación

Este testimonio, extraordinario por la mezcla de candor cínico y de desprecio de clase que exuda, nos revela tal vez más sobre el sistema político brasileño —muy similar al de muchos países de América Latina— que muchos extensos tratados de politología. Demuestra también meridianamente en qué avispero se habían metido los «aficionados» del PT, herederos tímidos e ingenuos de una maquinaria de corrupción que no empieza con la llegada de Lula al poder y que alcanzó un alto nivel de sofisticación durante la oleada de privatizaciones, en tiempos del gobierno de Cardoso.

Pero ¿cabe creer que la motivación principal de los medios de comunicación brasileños, que se ensañaron durante meses contra el gobierno, sea la decepción por la «traición» del PT y la preocupación por preservar la pureza «franciscana» de la izquierda? Si el PT, como le reprochan sus adversarios de izquierda y sus disidentes, no ha amenazado los intereses de las elites, ¿cómo se explica tanto odio en su contra?

En mi primera visita al Brasil de Lula, en 2004, había percibido la hostilidad de los grandes medios de comunicación contra los petistas. Mientras la cadena de televisión *Globo*, enemiga tradicional del PT, manifestaba una relativa moderación, los diarios de referencia como *Folha de São Paulo* o *O Estado de São Paulo*, así como el semanario *Veja*, estaban

en primera línea de fuego contra Lula. Sin embargo, en ese entonces, su hostilidad se mantenía aún en buena medida dentro de los límites de la polémica democrática. En abril de 2006, algo traumatizado por el tono casi insurreccional de la prensa paulista —mientras el ambiente relativamente apacible del país, pese a las enormes desigualdades, no se parece en nada a la polarización venezolana—, decidí visitar la redacción del semanario *Carta Capital*. Es el único órgano de prensa no partidista que escapa del clima de caza de brujas dominante en la prensa brasileña, el único capaz de criticar al gobierno sin evocar el Apocalipsis y de defender algunas de sus políticas sin servilismo.

Instalado en una calle paralela a la avenida Paulista, corazón de la metrópolis de los negocios y del poder, *Carta Capital* no parece exactamente un pasquín izquierdista o una publicación orgánica del PT. En la forma y en el tono, esta revista de maquetación sobria y elegante tiene más parentesco con *The Economist*, con sus secciones de consejos de inversión o de innovación tecnológica. Páginas culturales bien cuidadas, una rúbrica regular de salud y un editorial semanal bastante bueno del ex futbolista Sócrates se dirigen claramente a un público lector de clase media cultivada, preocupado por sus comodidades, su tiempo libre y su patrimonio, pero una décima por encima de la superficialidad ideológica sensacionalista, de la frivolidad mundana y del bombardeo publicitario de revistas como *Veja*, *Istoé* o *Epoca*. Salvo que *Carta Capital* es también un *The Economist* de centro-izquierda cuyas figuras tutelares, más que Adam Smith y Milton Friedman, serían John Maynard Keynes y Celso Furtado, uno de los padres de la teoría de la dependencia y del desarrollismo brasileños, partidario de un capitalismo nacional vigoroso y redistributivo.

Sérgio Lírio, de la sección política, me recibe amistosamente. Le confieso mi perplejidad: ¿no hay ningún periodista de oposición para denunciar esta deriva? ¿Ha hablado él con colegas de otros medios? Incluso en Venezuela, algunos reporteros de la prensa de oposición, sin pasarse al chavismo, han expresado públicamente su malestar frente a las derivas golpistas de los medios de comunicación locales. Sérgio mueve la cabeza con tristeza: «No hay nada que hacer, se trata de un mundo autista de autocelebración y de complacencia elitista, que se permite hablar en nombre de la ética. Es obvio que los prejuicios de clase y de raza de las elites político-mediáticas paulistas intervienen en este asunto». Aludiendo a su fenotipo de mestizo de piel clara que, no obstante, traiciona la

huella de algunos genes africanos, Sérgio señala riéndose: «Quizá soy el más moreno de toda la profesión en São Paulo». Como muchos de mis interlocutores, Sérgio confirma la persistente impresión que esta historia deja en el observador, sobre todo si ha tenido ocasión de compararla con el comportamiento de los medios de comunicación venezolanos: un obrero nordestino que comete faltas de gramática portuguesa en la Presidencia; algunos ministros procedentes de la militancia social y carentes del aura de «seriedad y competencia» de los funcionarios seleccionados entre elites tradicionales; un mínimo de inclusión social y de acceso al espacio público para millones de brasileños, en su mayoría nordestinos, negros o mulatos, los que hasta entonces sólo tenían derecho a entrar «*na cozinha sim, mas na sala não*» («en la cocina, pero no en la sala»)...

Sea cual fuere el grado de prudencia o de ortodoxia de la política económica del gobierno, esto es insoportable.

«Lo peor —continúa Sérgio— es que desde del punto de vista de la eficacia de la misma justicia y de la lucha contra la corrupción, incluida la corrupción de sectores del gobierno actual, el engendro político-mediático montado por la oposición es totalmente contraproducente. Se fija objetivos tan extravagantes pretendiendo que se trata del mayor esquema de corrupción de la historia de la República, de una especie de gigantesco pulpo mafioso al servicio del PT, que llega al siguiente resultado: al no poder demostrar algunos crímenes imaginarios, los crímenes reales se pasan por alto y se llega a absolver a los responsables de auténticos delitos electorales, como demuestran los escasos resultados de las CPI.» Sérgio concluye con amargura: «El trabajo de periodista es cada vez más difícil; si criticas al gobierno, eres un “tucán”,⁵ si desmontas el delirio seudojusticiero de los medios de comunicación eres un adepto al PT. En realidad, algunas figuras clave del *establishment* periodístico, como Diogo Mainardi, de *Veja*, no vacilan a través de sus artículos y editoriales en promover una verdadera campaña estilo maccarthista y denunciar a los periodistas “petistas”. Si comparamos lo que ocurre aquí con la experiencia de Venezuela y otros países, es difícil resistirse a la conclusión de que en América Latina los grandes medios de comunicación y los pocos grupos que los controlan están desempeñando un papel profundamente antidemocrático».

5. El tucán es el símbolo del PSDB.

Los movimientos sociales frente al «*companheiro* Lula»

Hay perplejidad en la cara de los habitantes de Recife. ¿Qué es ese cortejo alegre y colorido que desfila por la avenida Conde de Boa Vista? Al ver los numerosos *blocos* de percusiones y las crinolinas suntuosas de las bailarinas de *maracatú*, un ritmo afro-brasileño típico de la región, algunos sugieren que se está celebrando una variante tardía del carnaval. Otros observan bajo las banderolas y gorras con la sigla del MST los rostros atezados de los trabajadores agrícolas que han realizado más de treinta invasiones de tierra en el Estado de Pernambuco sólo en el último mes. «¡Otra manifestación de los Sin Tierra!» Lo mismo pensó la policía local al provocar gratuitamente este pacífico desfile, suscitando una refriega que la prensa local destacó gustosamente en sus portadas del día siguiente. En Recife, pero también en todo el país, el MST es una de las principales ovejas negras de los medios.

En realidad, se trata del cortejo festivo de apertura del segundo Foro Social Brasileño (el primero se celebró en 2003), reunido en el campus de la Universidad Federal de Pernambuco del 20 al 23 de abril de 2006. Desde hace dos períodos, el PT gobierna la capital regional y los pernambuqueños acuden a votar masivamente por Lula ese año, aunque la mayoría no tiene la menor idea de la naturaleza de este encuentro militante. Domingos, el taxista que al día siguiente me conduce hasta la ciudad universitaria me pide que le explique de qué se trata. Domingos está muy alejado del universo militante de la izquierda y de las organizaciones sociales brasileñas, pero también le dará su voto a Lula, y me cuenta espontáneamente por qué: «Claro que el PT y el gobierno han cometido errores, pero todos los partidos políticos lo hacen. Los que los denuncian son unos hipócritas, les molesta que un hombre del pueblo esté en el poder. Tengo seis hermanos que viven en el interior del Estado, y puedo asegurarle que la situación allí ha mejorado mucho. Con el programa *Bolsa Família* y el aumento del salario mínimo, hay dinero que circula. En muchas ciudades pequeñas, se retomaron las ferias semanales, que habían desaparecido hace años. Incluso hay migrantes que están regresando a la región». Con cierto orgullo añade: «Yo también, igual que Lula, tuve que abandonar mi tierra y he trabajado durante años en Rio y en São Paulo. Después pude comprarme un taxi y estoy muy contento de haber regresado. São Paulo es demasiado duro, no hay nada como el Nordeste, ya lo verá, la gente aquí tiene el corazón de oro».

Al llegar al campus ya sé lo que me espera: un gran escaparate de golosinas políticas e ideológicas, no siempre de la mejor calidad, una verdadera incitación a la glotonería febril y a la indigestión rápida. Pero hay que reconocer que el programa es relativamente claro y el evento está bien organizado, en torno a cuatro grandes ejes: «Movimientos sociales y sujetos de la transformación», «Desarrollo y alternativas al neoliberalismo», «Antiimperialismo e integración continental» y «Democratización del Estado e innovación institucional». En total, más de cuatrocientos talleres y debates, con un buen número de espacios dedicados a temas muy brasileños, como el racismo y la negritud, o la educación popular, tan apreciada en el país de Paulo Freire, una de las mayores figuras de la pedagogía social comprometida. En el manifiesto de convocatoria del Foro, los organizadores apelan explícitamente a los participantes a debatir sin sectarismos sobre los resultados, los límites y las contradicciones del gobierno de Lula. Les pregunto sobre su relación con el ayuntamiento petista de Recife y me explican que el acontecimiento se autofinancia, pero que el municipio ha hecho un gran esfuerzo poniendo a su disposición las infraestructuras. Pese a ese aporte, me dicen, no ha hecho ningún tipo de imposición en materia de contenidos.

Precisamente, una visita aleatoria de sala en sala demuestra que en los debates no hay autocensura y que la crítica a la política económica —y no solamente económica— del gobierno es unánime, si bien los participantes la expresan con más o menos vehemencia. En cualquier caso, me deja sorprendido, pues esperaba enardecidos enfrentamientos retóricos entre quienes denuncian con virulencia la «traición» del PT y los partidarios de la reelección del hombre que para muchos participantes sigue siendo el «*companheiro* Lula». Nada de eso ocurre, y los organizadores me confirman que el ambiente ha estado tranquilo en todas partes y que el único incidente del que se enteraron es un altercado entre un pastor evangélico homófobo y varios militantes gay. Constató, por mi parte, que los pequeños partidos radicales de izquierda han adoptado un perfil bajo y que se muestran muy discretos a lo largo del Foro. Hay escasa presencia de los trotskistas ortodoxos del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) y de los militantes locales del PSOL, en su mayoría disidentes del PT. Participan en los talleres a título individual o en representación de los movimientos sociales de los que son miembros; a saber, principalmente, el sindicalismo del sector público.

En cuanto a los militantes y simpatizantes del PT son claramente más numerosos y sus banderas y símbolos están presentes por doquier. Muchos están vinculados a organismos de participación ciudadana y de intervención social del municipio: secretarías del ayuntamiento, órganos del presupuesto participativo, comités de barrio o sectoriales, etc. A cualquiera que pregunto se declara orgulloso de su partido, dispuesto a afrontar la crítica con la cabeza en alto, pero muy respetuoso con la pluralidad de opiniones, incluso las más críticas en su contra. En resumen, el ambiente no parece inclinado a la confrontación y ningún rencor ideológico turba el humor festivo que impera en los espacios abiertos del campus, donde resuenan los ritmos del forró, de la samba y de la canción militante.

Estamos a pocos meses de las elecciones y, pese a que los debates se focalizan generalmente en las luchas e iniciativas de la sociedad civil, el Foro no obvia este hecho político. Durante la asamblea plenaria final, bajo una torrencial lluvia tropical que abre algunas goteras en la gran carpa central sin que ello altere el humor alegre y amistoso de los participantes, una serie de oradores y oradoras se suceden para martillar al auditorio con las mismas prioridades: hay que actuar como dique de contención al retorno de la derecha y, con ella, explican, al regreso de las privatizaciones, de la criminalización brutal de los movimientos sociales —algo que ya está ocurriendo de manera descentralizada en varios Estados de la federación donde gobierna la oposición— y de la sumisión a Washington; hay que consolidar las iniciativas unitarias de los movimientos para presionar al gobierno y al Congreso.

Hablo aparte con Gilson Reis, dirigente de la Central Única de Trabajadores (CUT), la principal confederación sindical brasileña, fundada en 1983 por Lula y sus compañeros al calor de las luchas obreras contra la dictadura. Uno de los principales problemas de la elección de Lula en 2002, me explica Reis, era el grado de desmovilización de los movimientos sociales, con la excepción relativa del MST: «Al margen de los errores de este gobierno y de su política económica —que todos coincidimos en describir como perversa—, es preciso comprender que, dada la situación minoritaria del PT en el Congreso y la fragilidad de las alianzas oportunistas que se ve obligado a constituir para llevar adelante su política, los proyectos de ley más progresistas defendidos por el gobierno suelen quedar bloqueados por una mayoría profundamente apegada al *statu quo*. Sin una ofensiva permanente de los movimientos populares y de las organizaciones progresistas de la sociedad civil, no se podrá avan-

zar mucho. La consolidación de la Coordinación de los Movimientos Sociales (CMS), que agrupa a treinta y cinco entidades del movimiento social, entre ellos el CUT, el MST, la UNE, los movimientos negros y los movimientos feministas, es una oportunidad importante para promover el cambio, gracias al grado de cohesión y de consenso que hemos logrado establecer entre nosotros».

La unidad es una lucha (a veces ambigua)

De regreso a São Paulo, busco a Sérgio Custodio, uno de los animadores del Movimiento de los Sin Universidad (MSU), una organización de jóvenes activistas de origen popular que se define como «un movimiento cultural, social y popular que lucha por la democratización de la universidad y la transformación cultural de Brasil». Cercanos al MST y a otros actores de las luchas sociales brasileñas, los militantes del MSU proceden de los movimientos de educación popular pero también del movimiento *hip hop*, que desempeña un papel de concienciación social y racial importante en algunas grandes periferias urbanas.⁶ Organizan cursos vespertinos y talleres de formación destinados a jóvenes de los sectores desfavorecidos, construyen bibliotecas populares y lideran una guerrilla permanente contra las barreras elitistas que traban el acceso de los jóvenes de las clases populares a la enseñanza superior. Sus armas son las manifestaciones clásicas, pero también el teatro de calle y los *happenings*. Se los ha visto incluso en varias ocasiones en el Parlamento, hostigando a los diputados que obstruyen las reformas encaminadas a democratizar la universidad.

Sérgio es un militante curtido, hijo de una costurera de la periferia de São Paulo y sabe de qué habla cuando aborda el tema de la exclusión escolar. Lo había escuchado en Recife en un taller sobre la reforma universitaria, la inteligencia y la pertinencia política de sus declaraciones me impresionaron bastante. Nos citamos en un café de la calle Augusta, en el centro de São Paulo. «Para nosotros —me explica—, el derecho a la educación es la “segunda abolición de la esclavitud”. Cada año alrededor de nueve millones de alumnos salen de la enseñanza secundaria pública, de ellos, al menos dos millones no podrán asistir a la universidad por falta

6. Véase capítulo 4.

de recursos para pagar la matrícula de los cursos preparatorios obligatorios o, una vez superado ese primer obstáculo, para sobrevivir en el sistema universitario. En la mayoría de universidades públicas, entre el 60 y el 80 % de los estudiantes proviene de institutos privados y esa tasa es todavía superior en las disciplinas más prestigiosas, como Derecho o Medicina; mientras que los que vienen de la enseñanza pública, generalmente negros o mulatos, se amontonan en las atetadas aulas de las facultades de Letras o de Pedagogía. El presidente Lula ha vivido en carne propia la exclusión escolar y estamos convencidos de que defiende sinceramente la causa de la gente de las periferias. A través de la acción del ministro de Educación, Tarso Genro, y de su sucesor Fernando Haddad, tenemos la esperanza de que se concreten políticas de democratización del acceso a la universidad.»

Una de las políticas educativas más populares del gobierno es el Programa Universidad para Todos (ProUni), que durante el primer mandato de Lula distribuyó cerca de 250.000 becas a alumnos de escasos recursos para que pudieran proseguir estudios en establecimientos de enseñanza superior particulares (Lula prometió 300.000 becas suplementarias para 2007). Este programa ha sido fuertemente criticado por la extrema izquierda, que lo considera una subvención disfrazada a la educación privada. Sérgio discrepa de esta percepción y considera que, aunque sea claramente insuficiente, el ProUni forma parte de un abanico de políticas que incluye también el acceso a las universidades públicas. Por ello, el MSU apoya activamente el proyecto de reservar obligatoriamente más del 50 % de plazas en las universidades públicas para los estudiantes procedentes de las escuelas públicas, con una ponderación específica a favor de los estudiantes negros e indígenas en las regiones donde proporcionalmente sean más numerosos. «Al inicio de su mandato, Lula tenía la intención de imponer por decreto medidas en este sentido. Pero este proyecto quedó bloqueado por un alto dirigente del PT vinculado al *lobby* de la enseñanza privada. La enseñanza privada es un sector económico muy poderoso y lucrativo y sus defensores controlan un número muy importante de diputados. El gobierno es minoritario en el Parlamento y, para poder establecer alianzas viables, han considerado que convenía no provocarlos.»

Eso sí que me deja un poco pasmado, y confieso a mi interlocutor que este comportamiento de un dirigente del PT me parece tal vez mucho más grave que la creación de cajas negras de campaña. Sérgio me contes-

ta que está parcialmente de acuerdo conmigo, pero refrena mi indignación: «No quiero que publiques el nombre de este dirigente porque no puedo permitirme atacarlo públicamente. Tienes que entender que las cosas son muy complicadas. Por ejemplo, si existen vínculos de sociabilidad entre algunos cuadros petistas y actores claves del *lobby* de la educación privada es, entre otras cosas, porque durante la dictadura, esos militantes universitarios pudieron sobrevivir en la semiclandestinidad refugiándose en la enseñanza particular, siendo profesores de los cursos preparatorios, etc. Lo paradójico es que el dirigente al que me refiero es también uno de los interlocutores más dignos de confianza de los movimientos sociales en el seno del gobierno, alguien que defiende en materia económica y social posiciones mucho más progresistas que el ala neoliberal ligada a Palocci y al Banco Central. Actualmente ya no es miembro del gabinete, pero seguirá siendo un actor político importante en los próximos años, incluso un aliado para muchas otras cuestiones, y nuestro movimiento no puede permitirse tenerlo como enemigo».

Veo que, efectivamente, las cosas son algo más complejas de lo que pueden explicar los esquemas ideológicos habituales en las relaciones entre movimientos sociales y gobiernos de izquierda, o entre «fidelidad al programa» y «traición». Sérgio remacha: «Al margen de sus propios límites y renunciias, hay que comprender que el PT está en el gobierno, pero eso no quiere decir que esté en el poder. Las relaciones de fuerzas le son extraordinariamente desfavorables, algunos politólogos llegan a afirmar que es todavía más difícil cambiar el país ahora que a principios de los años sesenta y que la mayoría del Congreso es por término medio más reaccionaria hoy que durante el mandato de João Goulart.⁷ Y sin embargo, hay sectores donde se puede avanzar, aunque los movimientos sociales están lejos de tener la capacidad para ejercer una presión suficiente. Antes de Lula, el Ministerio de Educación era prácticamente un feudo del *lobby* de la educación privada. El ministro Tarso Genro introdujo algunos cambios muy positivos, tanto en su organigrama como en su agenda política, y mantiene una comunicación muy fluida con algunos movimientos como el nuestro. Pero él mismo nos decía riendo: “En este Ministerio cada mañana tengo que comprobar que no me sirvan el

7. Presidente de la República entre 1961 y 1964. Sus reformas progresistas, apoyadas por los comunistas, le valieron la reacción agresiva de los círculos conservadores, lo que desembocó en un golpe de Estado militar apoyado por Washington.

café con una buena dosis de veneno». Francamente, el compañero João Pedro (Stédile) se ha equivocado al decir que el gobierno está “acabado”. Las cosas son más complicadas».

Los dilemas del MST

De hecho, los movimientos sociales no parecían haber llegado a la misma conclusión que Stédile cuando se reunieron en abril de 2006 en Recife. Tres meses después distribuyeron un millón de copias de un manifiesto en apoyo a la reelección de Lula. «Nuestra motivación es sencilla. Bajo el gobierno de Lula, Brasil está viviendo una de las mayores transformaciones de su historia. Cerca de 3,2 millones de brasileños superaron la línea de la pobreza. Siete millones ingresaron en la clase media y se crearon seis millones de empleos, cuatro de ellos en el sector formal. El aumento del salario mínimo fue del 20 %, el más importante en veinte años. Las inversiones destinadas a la agricultura familiar se cuatuplicaron y más de 266.000 campesinos sin tierra accedieron a ella. El poder adquisitivo de la población se incrementó y el precio de los materiales de construcción y de los alimentos bajó. El programa de transferencia de ingresos *Bolsa Família* es uno de los más importantes y eficaces del mundo. Ofrece un ingreso mínimo a más de once millones de familias pobres que, a cambio, se comprometen a mantener a sus niños en la escuela y a participar en programas de salud. El gobierno creó secretarías de Estado en defensa de la igualdad racial, de los derechos de las mujeres y de la juventud. La aprobación del estatuto del jubilado, junto a otras medidas, fortaleció los derechos y los beneficios de las personas mayores. Gracias al programa de becas ProUni, 203.000 estudiantes de familias pobres pudieron ingresar en universidades privadas. Queda mucho por hacer para superar varios siglos de exclusión social, agravada por el gobierno neoliberal del PSDB y del PFL. Romper con este legado no es una tarea fácil, pero el gobierno demostró que es posible. Mejor aún, mostró el camino del crecimiento económico y social».

El texto estaba firmado por la CUT y otros sindicatos obreros y campesinos más, por la UNE, por las principales organizaciones de afrobrasileños y de mujeres, y por una docena de colegios y federaciones profesionales (arquitectos, médicos, etc.), pero no por el MST. Su ausencia no era demasiado sorprendente, aunque no expresaba una oposición a la

reelección del presidente metalúrgico. Todos los militantes de base de los Sin Tierra a los que pregunté en Recife me dijeron que iban a votar a Lula. Sin gran entusiasmo en su mayoría, por más que su explicación («Nos sentimos un poco decepcionados, habría podido hacer más, pero hay que cerrar el paso a la derecha») estaba menos elaborada que la que ofreció su dirigente João Pedro Stédile: «En cualquier sociedad, y aún más en Brasil, los cambios no dependen del gobierno sino de la organización y de la movilización de la sociedad. Es el pueblo el que hace los cambios. En estos últimos años, la izquierda brasileña ha cometido el error de dejar que los militantes creyeran que bastaba con elegir un buen gobierno para hacer realidad los cambios. Lula está en el poder y casi nada ha cambiado. La gente tiene que darse cuenta de que no sirve de nada esperar todo del gobierno. El gobierno forma parte de la sociedad y es preferible que sea progresista. Es preferible un segundo mandato de Lula que la elección de Alckmin, que es la reencarnación de ese Drácula de Fernando Henrique. Pero los cambios esenciales de la sociedad no vienen del gobierno sino de las energías que la clase de los trabajadores logre movilizar organizándose a favor de sus derechos».

Creado a principios de la década de 1980 en el Estado de Rio Grande do Sul, muy ligado a la teología de la liberación y a la Pastoral de la Tierra, el MST es el movimiento de lucha campesina más importante del planeta, y probablemente uno de los más potentes y combativos del mundo. Como su nombre indica, hay más de un millón de campesinos carentes de tierra en un país donde nunca se ha llevado a cabo ninguna reforma agraria sustancial y donde el 1 % de los propietarios posee el 54 % de las tierras cultivables. Conocido por sus acciones de ocupación de latifundios y de tierras consideradas improductivas, ha conquistado cerca de siete millones de hectáreas, divididas en parcelas de 10 a 20 hectáreas que las familias miembros del movimiento explotan de manera individual o colectiva. Los Sin Tierra defienden relaciones de producción cooperativas y solidarias y una agricultura ecológica, sin pesticidas, sin abonos químicos ni transgénicos, favoreciendo la diversificación de cultivos, la reforestación, el cultivo de plantas medicinales, el autoabastecimiento alimentario y la comercialización de los excedentes a precios accesibles para los más desfavorecidos.

El MST concede una enorme importancia a la educación de sus miembros: alfabetización, formación política y militante de los jóvenes y adultos. A su vez, la derecha le acusa de ser un movimiento de adoctrina-

miento de los campesinos pobres, propagando una ideología subversiva y totalitaria. Los Sin Tierra han construido 1.800 escuelas y escolarizado a 160.000 niños, y 3.900 profesores practican la pedagogía de Paulo Freire y han sido formados por el movimiento con la ayuda de siete universidades públicas.

Desde los inicios del mandato de Lula, el MST no ha ocultado sus reparos respecto al movimiento petista. En marzo de 2006, reunido en Porto Alegre junto con otras organizaciones rurales, redactó incluso un balance de 39 puntos de la política agrícola desarrollada desde 2003. Del lado positivo, los Sin Tierra señalaban, entre otros aspectos, la creación de un sistema de seguro agrícola que cubre los riesgos del trabajo y las catástrofes naturales (aunque sólo 1,2 millones de familias de un total de cinco millones tenían acceso al mismo hasta 2006), el incremento del volumen de crédito a los pequeños labradores de 3 a 8 mil millones de reales, la electrificación casi completa de las zonas rurales, el refuerzo de los programas de ayuda a la construcción y a la vivienda rural, la no represión de los movimientos sociales, el aumento de los programas de educación rural, la demarcación de ciertas zonas indígenas protegidas, el programa nacional de biodiesel, el notable aumento del presupuesto de los programas de asistencia técnica a los agricultores y el programa de instalación de cientos de miles de cisternas familiares en la zona semiárida del Nordeste.

Del lado negativo, el MST subrayaba: la autorización provisional para plantar y comercializar soja transgénica; la elaboración de una ley de seguridad biológica que no toma en consideración las reivindicaciones de los campesinos y ecologistas; el favoritismo político, fiscal y económico hacia el agronegocio; la ausencia de demarcación de otros territorios reivindicados por los indígenas; y la falta de una presión suficiente sobre los tribunales para acabar con la impunidad de los crímenes y matanzas cometidos contra los campesinos en su lucha. Las cifras de esta impunidad son especialmente dolorosas: de 1985 a 2004, 1.379 campesinos fueron asesinados; después de 75 procesos por homicidio, solamente 15 autores intelectuales y 74 ejecutores fueron condenados por la justicia.

El principal cuestionamiento del MST, sin embargo, se refiere al número relativamente pequeño de instalaciones de campesinos sin tierra (apenas un 10 % más que durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso) y la timidez de las medidas de reforma agraria. «Las medidas tomadas por el gobierno en cuatro años han beneficiado mucho más al

agronegocio que a la reforma agraria —explica Stédile—. El gobierno no tiene ni siquiera el valor de actualizar los índices de productividad que permiten saber si una *fazenda* puede expropiarse. Estamos aún funcionando con los índices del Instituto Nacional de Colonización y de Reforma Agraria (Incra) de 1975. En conjunto, el gobierno sigue privilegiando al sector agroexportador. La agricultura brasileña debería en primer lugar cumplir con su función primordial: producir alimentos sanos y baratos para el pueblo que, por desgracia, sigue pasando hambre o no puede satisfacer completamente sus necesidades de nutrición básicas.»

No obstante, si el MST no ha pasado a la oposición pura y dura —pese a los llamados del PSOL, por ejemplo— es porque en la práctica las cosas son mucho más matizadas. Las relaciones locales y nacionales de los cuadros del movimiento con muchos funcionarios y legisladores del PT son a menudo cordiales, e incluso excelentes cuando algunos de esos apoyan abiertamente a los Sin Tierra contra la represión local. Además, según dicen algunos iniciados, los canales de comunicación con la Presidencia están lejos de haberse roto. Después de haber visitado un campamento de los Sin Tierra y haber encontrado ahí a varios militantes petistas, la socióloga argentina Maristella Svampa no me oculta su sorpresa, acostumbrada como está a las posturas tajantes —a favor o en contra del gobierno de Kirchner—, que suelen prevalecer entre los movimientos sociales de su país. La imposibilidad práctica de equiparar a Lula con la derecha responde también a esta relación fluida. En una entrevista concedida a la periodista Marina Amaral, el diputado del PFL José Carlos Aleluia resumía de manera muy elocuente la opinión de la oposición sobre la idea misma de una reforma agraria: «Hay que acabar con esta idea de reforma agraria desde ya. Los Sin Tierra no existen, se trata de una entidad inventada para fortalecer la base movilizable del PT». Podríamos explicar esta apreciación contundente por el arcaísmo y el autoritarismo de un diputado bahiano vinculado a ACM. Pero la frase «los Sin Tierra no existen» ya había aparecido en agosto de 2003 en la portada del mensual *Primeira Leitura*, publicación orgánicamente ligada al moderno, civilizado y «socialdemócrata» PSDB.

«Casi nada ha cambiado» en el Brasil de Lula, según João Pedro Stédile. Sin embargo, el 18 de julio de 2006, este líder de un movimiento campesino al que los medios de comunicación brasileños suelen describir como un cruce diabólico entre las FARC colombianas y el Hezbolá

libanés, fue invitado a dar una conferencia sobre «reforma agraria y ambiente» ante un auditorio de oficiales de la Escuela Superior de Guerra, «en un clima de distensión e incluso de buen humor», relata la prensa. «Al final de la conferencia, el general José Benedito Barros Moreira, comandante de la Escuela, se declaró de acuerdo casi por completo con las declaraciones de Stédile, limitándose a expresar sus reservas con respecto a los métodos de acción del MST. Comentó la necedad de las elites que no comprenden que mejorar el nivel de vida de los brasileños mediante el desarrollo de un mercado interno sería beneficioso para esas mismas elites.» Y de paso aceptó la invitación que les hizo Stédile a los maestros y becarios de la Escuela de Guerra para que visiten la universidad autogestionada Florestan Fernandes, que forma a los cuadros del MST.

Continuidades y rupturas

Algo, por lo tanto, ha cambiado en el Brasil de Lula, si bien la cuestión de saber qué exactamente es bastante controvertida. Muchos comentaristas, entre ellos el politólogo y antiguo embajador de Francia en Brasilia, Alain Rouquié, perciben una continuidad fundamental entre los ocho años de mandato de Fernando Henrique Cardoso y la Presidencia de Lula: «Desarrollan, con ciertos matices, el mismo programa económico y social, aun cuando esta proximidad sigue siendo inconfesable. Lula, al fin y al cabo, prolonga el Plan Real que permitió a su predecesor sacar a Brasil de una inflación enfermiza, así como las políticas sociales que Cardozo esbozó». Se trataría de algún modo de dos versiones estilísticamente algo distintas de un mismo «blairismo tropical», una mezcla de ortodoxia económica y de reforma social focalizada y bastante prudente.

La tesis resulta seductora y no faltan, por lo demás, analistas que piensan que la gran tragedia de Brasil es la incomprensible hostilidad entre los dos «hermanos enemigos», el PT y el PSDB, obligados a asumir su vocación de poder aliándose cada uno por conveniencia con partidos de derecha arcaicos, corporativistas y clientelistas, cuando según toda lógica deberían fusionarse dentro de una gran organización social-demócrata centrista y modernizadora. Eso es olvidar la matriz sociológica y la sensibilidad bastante distinta de estas dos formaciones políticas. Pese a su innegable profesionalización y «notabilización» política, el PT

es un partido de masas de origen sindical y popular, que no solamente cuenta aún con numerosos canales de comunicación con los movimientos sociales, sino que ahora tiende a atraer a un electorado aún más plebeyo que en sus orígenes, aunque probablemente menos politizado.

El PSDB, pese a que también se originó en la lucha contra la dictadura, es una formación sumamente elitista donde un reducido grupo de universitarios modernizadores y de actores políticos ligados al sector privado se erige en vanguardia de las clases medias urbanas «ilustradas», incluso si en la década de 1990, Fernando Henrique Cardoso supo atraer el voto de los pobres, que le reconocían el mérito de haber acabado con la inflación. Además, si bien es cierto que Lula ha tenido que negociar con mayor o menor fortuna y habilidad con los pequeños partidos de derecha para conseguir una mayoría en el Parlamento, el doble mandato de Cardoso se caracterizó por una alianza orgánica del PSDB con las fuerzas más reaccionarias de la clase política brasileña. Pese a su etiqueta «socialdemócrata» y a sus veleidades de modernización del país, se puede afirmar que el PSDB ofreció una segunda vida a algunos de los grandes caciques más corruptos y más nefastos del escenario político brasileño. Desde luego, el propio Fernando Henrique Cardoso no vaciló un día en confesar su escepticismo frente a la sigla oficial de su partido: «Yo no quería que el partido se llamara PSDB. Siempre he sido hostil a que se incluyera la socialdemocracia en las siglas». Y añadía con un escrúpulo profesional de doctor en sociología: «¿Cómo voy a pasar el resto de mi vida explicando que un partido que no tiene sindicato se llame así?».

Pero las diferencias rebasan esta matriz sociológica y tienen que ver también con la dinámica y con los resultados de las políticas públicas desarrolladas. En primer lugar, se da una paradoja bastante interesante: la gestión macroeconómica «ortodoxa» que los críticos de izquierda del PT reprochan a Lula resultó mucho más eficaz que la que aplicó su predecesor. Obtuvo incluso resultados espectaculares en la disminución de la vulnerabilidad externa del país, una evolución simbolizada por el descenso vertiginoso del índice de «riesgo país»: de 2.436 puntos en septiembre de 2002 a 216 puntos en mayo de 2006. Durante el primer mandato de Lula, el valor de las exportaciones brasileñas se duplicó en relación a los dos mandatos de Cardoso, lo que provocó un excedente histórico de la balanza comercial y de la balanza de cuentas corrientes (ambas fuertemente deficitarias en tiempos de su predecesor). Mientras Cardoso infló la deuda exterior, que pasó de 148 mil millones de dólares

a 227 mil millones entre 1994 y 2002, el petista la redujo a 169 mil millones. En el mismo lapso, la relación deuda/PIB pasó de 29,2 % a 56,5 %. Lula consiguió que bajara nuevamente a cerca del 50 %. Además, su perfil se modificó profundamente: los créditos que dependen de las divisas extranjeras actualmente representan sólo el 2 % del total (30 % en 2001). Lo mismo sucede con la relación deuda exterior neta/PIB (para calcularla, de la deuda bruta se resta la reserva internacional, así como los créditos y activos de los brasileños en el exterior), que pasó de 17,4 % en 1994 a 40,4 % en 2002 y que el gobierno Lula llevó al 14,7 %. Simultáneamente, la reserva monetaria internacional subió considerablemente, de 16,3 mil millones de dólares (contra 38,8 en 1994) a 53,8 mil millones, y Brasil pagó anticipadamente la totalidad de su deuda con el FMI. El diario *O Estado de São Paulo* publicaba este titular con motivo del segundo escrutinio de octubre de 2006: «Por primera vez en veinte años, unas elecciones sin crisis económica». Y explicaba que «el candidato que gane hoy las elecciones no necesitará ponerse el traje de bombero para apagar los incendios en el área económica. Se encontrará al frente de un país dotado de unos indicadores macroeconómicos capaces de suscitar la envidia de todos aquellos que ocuparon este cargo desde el proceso de retorno a la democracia, durante la década de los ochenta».

Podríamos afirmar que estas cifras no hacen sino demostrar hasta qué punto el PT de Lula se convirtió en un buen discípulo del neoliberalismo. A lo cual otros podrían responder cuestionando el argumento bastante imprudente de que la estabilidad macroeconómica sería en sí misma un valor «neoliberal». Pero no se da una diferencia exclusivamente en términos de la «buena gobernanza» de la economía. Fernando Henrique Cardoso había privatizado el 12 % del PIB brasileño, en una serie de operaciones especulativas a menudo marcadas por la corrupción y la subvaloración escandalosa del patrimonio del Estado, como en el caso del gigante siderúrgico Vale do Rio Doce, cuyo precio de mercado en 2005 era quince veces superior a aquel al que fue vendido en 1997. Lula suspendió las privatizaciones y reafirmó claramente el papel de los grandes organismos estatales en la conducción de la economía, aun cuando paralelamente el gobierno petista abrió el camino para las «asociaciones público-privadas» (PPP), un esquema de administración mixta del desarrollo —especialmente en los sectores de infraestructuras portuarias y de transporte—, que algunos critican como otra forma de achicamiento del Estado de tipo «blairista» y de privatización rampante.

Sin embargo, en tiempos de Lula se constata un claro fortalecimiento del papel de organismos como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), la Caixa Federal o el Banco do Brasil en la política de recuperación, de promoción y de orientación de las infraestructuras materiales y financieras del crecimiento y de los programas de crédito destinados a los sectores populares (6,6 millones de brasileños pobres han podido abrir por primera vez una cuenta bancaria gracias a un procedimiento simplificado). Esos organismos, al igual que la compañía petrolera nacional Petrobras, estaban explícitamente abocados a un desmantelamiento progresivo por los ideólogos del PSDB. Cuando se sabe que el presupuesto del BNDES, por ejemplo, es superior al del Banco Mundial, tenemos que admitir que tal cambio de orientación es algo más que un simple matiz.

En el fondo, los «tucanes» preconizaban un matrimonio de amor con el capital nacional y transnacional y estaban dispuestos a sacrificar todo en las llamas de su pasión por los mercados. La opción del PT que, por cierto, ya no habla mucho de «socialismo», es en cambio la de un matrimonio de razón con separación de bienes, pues el Estado desea conservar un patrimonio y unos instrumentos de intervención que le garantizan un cierto margen de maniobra. En este aspecto, como señala la economista Maria da Conceição Tavares, Lula no hace sino devolver a Brasil a la senda del «nacional-desarrollismo» bastante moderado que, con distintos matices, practicaron tanto los gobiernos civiles nacionalistas y progresistas de la década de 1950 y principios de la de 1960 como los gobiernos de la dictadura militar posteriores al golpe de Estado de 1964. Este desarrollismo a la brasileña a menudo ha asociado una política presupuestaria y monetaria relativamente prudente y ortodoxa a una clara centralidad del papel del Estado en el desarrollo de las infraestructuras y del aparato productivo. Desde este punto de vista, el mandato de Cardoso marcaría un paréntesis antiestatalista extremista y un desvío con respecto a la tradición.

Pero como hemos visto, son los avances sociales del gobierno los que más han contribuido a garantizar su popularidad y a subrayar el contraste con su predecesor. Como enfatizan sus críticos de izquierda y de derecha, muchos de los programas sociales de Lula ya habían sido iniciados por el gobierno anterior. La diferencia estriba en que, tras algunos meses de tanteos que estuvieron a punto de hacer zozobrar el famoso plan «Hambre Cero» (nombre que funciona hoy más como una etiqueta glo-

bal que como un programa específico), el PT empezó a unificar, a reestructurar y a universalizar cierto número de programas focalizados ya existentes, cuadruplicando aproximadamente el presupuesto de estas ayudas sociales y el número de sus beneficiarios. Con esta potenciación, esas medidas alcanzaron un nivel decisivo de visibilidad y eficiencia, y empezaron no solamente a tener efectos redistributivos muy importantes, sino a redinamizar la economía de las regiones más pobres, en particular del Nordeste.

El más conocido es el famoso programa *Bolsa Família*, que entrega a las familias pobres que disponen de menos de 120 reales al mes (unos 43 euros) un subsidio de 15 reales por niño de 16 años hasta un total de 95 reales (34 euros). Aquellas que viven por debajo del nivel de la pobreza extrema, es decir, con ingresos inferiores a 60 reales mensuales (21 euros), reciben una ayuda adicional de 50 reales. Para una pareja que gana menos de 60 reales y con dos hijos a su cargo, eso significa un ingreso adicional de 80 reales. Una suma nada desdeñable en un país donde el salario mínimo mensual es de 350 reales (127 euros). El pago se da a la madre mediante una tarjeta magnética válida por un año, la que le permite comprar a su conveniencia —y que la libera de la dependencia clientelista de los caciques locales, que antes eran los intermediarios obligados para obtener limosnas y favores. Para los más pobres, la *Bolsa Família* supone a menudo la diferencia entre la malnutrición y una alimentación mínima decente y regular.

Así, el efecto conjunto de la *Bolsa Família*, del aumento de un 25,8 % del valor real del salario mínimo —que sirve también de valor de referencia para el cálculo de las pensiones de ancianidad y de invalidez, de las que dependen decenas de millones de familias pobres— y el importante descenso de la inflación (de 12,5 % en 2002 a menos de 5 % al final del primer mandato de Lula) activaron el poder adquisitivo de los pobres, que ha aumentado en casi un 60 % en relación a la cesta de consumo básica. La creación de más de cuatro millones de empleos en cuatro años dentro del sector formal es tal vez decepcionante en relación a los diez millones que Lula prometió al inicio de su mandato, pero es incomparablemente mejor que los cien mil empleos anuales creados por Cardoso en ocho años. El notable incremento de la ayuda a las pequeñas explotaciones agrícolas, la democratización masiva del acceso al crédito, el programa de farmacias populares a bajo precio, los programas de democratización de acceso a la educación superior, así como el proyecto de creación de

decenas de universidades y de extensiones universitarias en las regiones desheredadas del interior del país (una quincena de ellas ya funcionan), son otras tantas medidas que contribuyeron a la reelección de Lula en 2006.

Pobreza, desigualdades y renta financiera

Siempre resulta difícil medir la evolución de la pobreza y de la calidad de vida, en virtud de las muchas dimensiones objetivas y subjetivas de tales nociones. La impresión de que la situación ha mejorado es innegable: una encuesta del Instituto Datafolha efectuada en junio de 2006 revelaba que el 28 % de los electores consideraban sus ingresos «muy insuficientes», frente a un 45 % cuando Lula llegó al poder. En términos más o menos aproximativos, según un estudio publicado por la Fundación Getúlio Vargas y apoyándose en los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el número de brasileños que vivía por debajo del umbral de pobreza bajó de 19,18 % entre 2003 y 2005, pasando de 28,2 a 22,7 % de la población, es decir, 42,570 millones de personas. (El nivel de pobreza se define en alrededor de 56 dólares mensuales, la suma necesaria para adquirir 2.288 calorías de alimentos. El mismo estudio señala que el número de brasileños que viven en la «pobreza extrema», es decir aquellos que ganan menos de un dólar diario, disminuyó un 19,2 % entre 2003 y 2005.) Durante este mismo período, el ingreso medio se incrementó en promedio un 4,8 % al año, pero el aumento fue más rápido para los más pobres: un 8,4 %. De su lado, el índice de Gini, que mide la magnitud de las desigualdades, experimentó un descenso de 3,6 %. Son los mejores resultados en materia de pobreza y de desigualdad desde 1992, lo cual no impide que Brasil siga siendo el líder mundial en este campo.

Según el PNUD, el país de Lula, que era el tercero en el mundo con las mayores desigualdades en 2002, ha mejorado su clasificación en 2006 al pasar al décimo nivel (entre 126 países), por detrás de Colombia, Bolivia, Haití y seis naciones del África subsahariana. Un progreso medianamente satisfactorio, que no se debe por entero a sus esfuerzos, puesto que también está vinculado a la degradación de los indicadores de Bolivia y a la entrada de Haití en la clasificación. El 10 % de los brasileños más ricos —dueños de la segunda flota de aviones y helicópteros privados del planeta— concentran todavía el 45,1 % de los ingresos, mientras

que la mitad de la población recibe tan sólo el 14,1 %. En países con un PIB por habitante comparable al de Brasil, la proporción de pobres es sólo un 10 % de media. En la gran mayoría de naciones, la relación entre el ingreso medio del 20 % de los más ricos con el 20 % de los más pobres es inferior a 10, con una media en torno a 7 (8 en Francia). En Brasil era de 32 en 2001. En otras palabras, los más pobres necesitaban un año para ganar lo mismo que los más ricos en once días.

Gobierno y oposición, así como la mayoría de analistas, coinciden en pensar que solamente un crecimiento más vigoroso permitiría mejorar de modo significativo unos indicadores que continúan siendo desastrosos. Aunque un poco más fuerte que durante el mandato de Cardoso (2,32 %), con Lula, el crecimiento se ha mantenido muy por debajo de la tasa media del conjunto de América Latina, estimada en el 4,3 % —sin hablar del crecimiento de las economías emergentes, como China o la vecina Argentina, que gira en torno al 8 o 9 %. Con un 3 % aproximadamente, Brasil sólo ha superado en la región a Haití, Jamaica y Guayana. Como señala un análisis publicado en el diario francés *Le Figaro*, si a Brasil le cuesta salir del círculo vicioso del crecimiento débil es porque «las inversiones en infraestructura que exige la expansión económica se han vuelto imposibles debido a los tipos de interés prohibitivos y al excedente presupuestario. Este último es necesario para financiar la deuda, que sigue aumentando a causa de... los elevados tipos de interés». So pretexto de luchar contra la inflación, esas tasas reales de más de un 10 % anual en promedio (las más elevadas del mundo) asfixian el consumo y la inversión, acentuando la sobrevaloración del real, lo que perjudica al dinamismo de las exportaciones. Sin contar con que reducen drásticamente el margen de maniobra de las políticas sociales. El resultado: el presupuesto del Estado se ha transformado en una máquina de devolver una buena parte de los ingresos fiscales a las elites económicas a través del pago de intereses.

Los aliados tradicionales del PT son los primeros en denunciar este perverso mecanismo. Así, para el secretario general de la muy progresista Conferencia Episcopal de Brasil, el obispo Odilio Scherer, el Brasil de Lula se ha convertido en un «auténtico paraíso financiero», mientras que para el arzobispo de Salvador de Bahía, Geraldo Majella Agnelo, «nunca hubo un gobierno tan sometido a los banqueros». En 2005, los beneficios de Bradesco, el mayor banco del país, fueron un 80 % superiores a los de 2004, constituyendo un récord absoluto en la historia del sis-

tema financiero latinoamericano. El segundo banco, Itaú, ganó asimismo un 40 % más. Los otros grandes bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal y Unibanco, también alcanzaron récords históricos. Ese mismo año, el gobierno gastó más de 63 mil millones de dólares en pagar el servicio de la deuda interna y externa (respectivamente 85 y 15 %), es decir, casi un cuarto de su presupuesto.

Según el economista Márcio Pochmann, miembro del PT, los 54 mil millones de dólares al año que el Estado entrega en promedio a los tenedores de los títulos de la deuda pública representan entre el 7 y el 8 % del PIB brasileño: «Hoy, la economía se gestiona en función de los intereses de las 20.000 familias que controlan el 80 % de los títulos de la deuda pública. Esas personas no quieren que descendan los tipos de interés. Si sucede, recogerán su dinero, dejarán de financiar la deuda y abandonarán el país. Somos prisioneros de una elite que prácticamente abandonó cualquier política a favor del pleno empleo, de la producción y del trabajo en nombre de la financiarización de la riqueza». Otro economista, César Benjamin, candidato a la vicepresidencia de la disidente del PT Heloisa Helena en 2006, no oculta su indignación: «En 2003, nuestro gobierno pagó 149 mil millones de reales de intereses a los poseedores de los títulos de la deuda interna (que sigue aumentando). Es cinco veces más que los gastos autorizados en sanidad pública, ocho veces más que los gastos en educación, 28 veces más que los gastos en materia de transporte, 47 veces más que los gastos en seguridad pública, 50 veces más que las sumas dedicadas a protección ambiental, 70 veces más que las inversiones en ciencia y tecnología, y 140 veces más que las sumas dedicadas a la reforma agraria. Sobran los comentarios».

Pero la mayoría de brasileños pobres no presta demasiada atención a las polémicas de los expertos ni a las eruditas consideraciones sobre los tipos de cambio, las tasas de interés, el excedente presupuestario, el servicio de la deuda y la reserva monetaria internacional. Cuando uno está acosado por la necesidad, los beneficios reales de un progreso social modesto pero sensible pesan más que las ganancias abstractas que pudieran derivar de una reestructuración hipotética del sistema.

Eso es claramente lo que siente Jefferson, un joven al que conocí en el Foro Social de Recife y con el que pasé las doce horas que duraba el viaje en autobús que separan la capital pernambuqueña de Salvador de Bahía, donde él vive. Al descubrir que yo no sabía aún dónde iba a pernoctar, Jefferson se niega categóricamente a permitir que vaya a buscar

un hotel. Llegados al amanecer a Salvador, a la salida de la estación subimos a un autobús urbano hasta Massaranduba, un barrio popular donde colindan un hábitat obrero más o menos estabilizado y zonas más precarias tipo favela. Entramos en la callejuela donde vive Jefferson y donde se yuxtaponen edificios de dos o tres pisos en diverso grado de construcción y de definición. Su esposa nos recibe en el apartamento de cuarenta metros cuadrados que alberga a su familia de cuatro hijos.

Un poco preocupado al ver el pequeño sofá, no desplegable, que domina la salita de estar delante del televisor, me pregunto dónde voy a extender mis huesos. Pero llegada la noche, en un abrir y cerrar de ojos, mi anfitrión evacua a dos de sus hijos dormidos sobre un jergón en una de las dos habitaciones, instala a uno de ellos en el sofá con su hermano mientras el otro se reúne con su hermana pequeña y los padres en el lecho conyugal. Desaparece un momento en la terraza cubierta por un techo de zinc, que corona el edificio, y regresa trayendo unas tablas que con unos buenos martillazos y un destornillador se transforman en una cama somera pero acogedora: «Es perfecto que hayas venido; hasta ahora me había dado pereza montar esta cama». Milagros de la hospitalidad brasileña.

Jefferson es un autodidacta de inteligencia viva y curiosidad insaciable. Está encargado de supervisar la distribución y las suscripciones regionales de una revista mensual de izquierda de São Paulo, la revista *Caros Amigos*, empleo que le proporciona un ingreso modesto pero que le ofrece una panorámica muy sustanciosa de las controversias entre partidarios y críticos de Lula. Ocasionalmente realiza otros trabajos, y paralelamente intenta continuar con sus estudios. Desborda de ideas. Me explica detalladamente su visión de la reforma agraria —dice tener una solución para los Sin Tierra: hay que construir fábricas en el campo— y sus ambiciones de montar un día una buena librería de izquierdas en Salvador. Terminamos hablando de la política social del gobierno: «Mira, yo recibo la *Bolsa Família* para mis cuatro hijos, eso supone prácticamente duplicar mis ingresos, y te aseguro que resulta una ayuda muy apreciable. Me deja la mente libre para pensar en el futuro. Ahora, desde luego, la lentitud en los cambios, los escándalos de corrupción, sabes, estoy enterado de todas esas críticas, y yo mismo comparto muchas de ellas. Pero bueno, aquí todo el mundo se conoce y todas las personas que conozco van a votar a Lula. No, estoy diciendo tonterías, conozco a una persona que va a votar a Heloisa Helena. Pero todas las demás, no hay duda, votan a Lula».

La delincuencia como forma de guerrilla urbana

Apenas unas horas antes de mi llegada a Massaranduba, a unos cientos de metros del modesto apartamento de Jefferson, un policía, al parecer presa de una irrefrenable crisis de celos mortíferos, asesinó a siete miembros de una misma familia, entre ellos un bebé de un año y un adolescente de once. Los ánimos de los habitantes del barrio estaban caldeados: al margen del motivo alegado, evidentemente aquélla no era la primera vez que inocentes —de preferencia jóvenes, pobres y negros— morían abatidos por un representante de las fuerzas del orden en Salvador. Es más bien la triste rutina de las metrópolis brasileñas. Así, por ejemplo, de enero de 1996 a diciembre de 2005, más de 3.200 «sospechosos» cayeron bajo las balas de la policía del Estado de São Paulo. La mayoría no tenía antecedentes criminales ni había cometido infracción alguna.

El incidente de Massaranduba me devolvía a una realidad menos simpática que la hospitalidad improvisada de mi anfitrión y su entusiasmo razonado ante el cambio social que se estaba viviendo. Con solamente el 2,8 % de la población del planeta, Brasil «contribuye» con un 11 % al total de homicidios cometidos anualmente en el mundo. Según el PNUD, hay un asesinato cada doce minutos y la media anual de víctimas mortales por armas de fuego —que representan cerca del 70 % de los homicidios— es de 40.000, esto es, un número mayor que el de las víctimas del conflicto iraquí. Entre 1980 y 2000, la tasa de mortalidad por homicidio se duplicó con creces en Brasil, pasando de un 11,7 a un 27 por cada 100.000 habitantes, hasta sumar medio millón de personas. Las regiones más afectadas por la violencia criminal son los Estados de São Paulo (42 por 100.000), Espírito Santo (46), Rio de Janeiro (51) y Pernambuco (54), cuya capital, Recife, está considerada la ciudad más violenta del país. Esos índices de mortalidad homicida son todavía más graves cuando se aísla la población masculina, donde se ha pasado de 21,2 muertos por 100.000 habitantes en 1980 a 49,7 en 2000. Entre los muchachos de quince a veinticuatro años, el número de víctimas es simplemente terrorífico, pasando de 150,2 por 100.000 habitantes en 1996 a 173,8 en 2000, con una punta de 205 por 100.000 habitantes en Rio de Janeiro.

A los efectos nefastos de esta hecatombe, hay que añadir la ineficacia de la policía y de la justicia: solamente el 5 % de los expedientes de homi-

cidio llegan a resolverse en São Paulo, 7,8 % en Rio de Janeiro. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, Brasil gasta el 10 % de su PIB en políticas de seguridad, es decir, casi el doble de la suma de los recursos destinados a la educación, la salud y los programas sociales. El sector privado gasta 25 mil millones de dólares al año en seguridad, una «industria del miedo» tan espectacular como socialmente ineficaz, sobre todo cuando se sabe que, aquellos que no tienen acceso a sus servicios, es decir los pobres, son generalmente quienes se matan y roban entre ellos.

Las proyecciones cartográficas por sectores urbanos revelan precisamente que los barrios comerciales y las zonas residenciales centrales de São Paulo, por ejemplo, tienen una tasa de criminalidad cercana a la de las metrópolis europeas y que la hecatombe se concentra en las periferias. Pero, a veces, la violencia extrema también se acerca a estos espacios protegidos. Así ocurrió a mediados de mayo de 2006, cuando los «soldados» de una mítica y temible organización criminal, el Primer Comando de la Capital (PCC) lograron poner a sangre y fuego la más vasta y rica metrópoli del continente sudamericano. Ochenta y dos establecimientos penitenciarios amotinados; cientos de rehenes —parientes, visitas, guardianes—; decenas de ataques a comisarías, bancos y coches de policía; 299 autobuses incendiados con cócteles Molotov; y un balance oficial de 493 muertos en una semana de pánico que paralizó la vida económica del Estado de São Paulo y de su orgullosa megalópolis, víctimas de un toque de queda autoimpuesto y del cierre espontáneo de la mayoría de oficinas y comercios. Ni siquiera la industriosa Medellín en los peores momentos de las ofensivas de terror de los sicarios del colombiano Pablo Escobar, en la década de 1980, llegó a conocer semejante desorganización.

No es precisamente con las experiencias pasadas de Bogotá y de Medellín con lo que algunos analistas comparan la semana trágica de São Paulo, sino más bien con el Beirut de la guerra civil e incluso con el caos de Bagdad desgarrado por las facciones iraquíes. Para el coronel Geraldo Lesbat Cavagnari Filho, del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Campinas, «son los hombres del PCC los que tomaron la iniciativa de las acciones contra la población paulista, creando un efecto sorpresa, pese a que la policía estaba informada con antelación de dichos ataques». Y fueron también ellos los que decidieron poner fin a su ofensiva, sin que quepa atribuir el final de las hostilidades a la acción de ningún cuerpo policial.

«La táctica de esta facción consiste en realizar acciones violentas y puntuales que aprovechan el efecto sorpresa. Estas acciones fueron interrumpidas y se reanudarán en cuanto se den nuevas condiciones ideales. Se parecen mucho a lo que los terroristas sunitas hacen en Irak, en concreto en Bagdad. Salvo que ahí los terroristas ejercen una presión permanente que los criminales no están en condiciones de realizar aquí, porque las señas de sus dirigentes son conocidas: las cárceles.»

Aunque refleja de manera elocuente el imaginario de los medios de comunicación y de la policía, la comparación es bastante exagerada, ya que en São Paulo los rumores de bombas en el metro y en los aeropuertos no fueron sino eso: rumores infundados. Además, la mayoría de víctimas civiles de esta semana negra no fueron blancos del PCC sino producto de las ejecuciones sumarias practicadas en los suburbios pobres por una policía sedienta de venganza. Según las declaraciones oficiales de la policía, al menos 28 de los 122 «sospechosos» asesinados por las fuerzas del orden en la región metropolitana de São Paulo no tenían antecedentes penales. Por otro lado, la mayoría de la opinión pública y de los medios de comunicación está convencida de que el alto el fuego del 19 de mayo —que no impidió ataques esporádicos a lo largo de los meses siguientes, una vez pasada la tregua sagrada del Mundial de Fútbol— responde a un acuerdo secreto entre el PCC y las autoridades del Estado de São Paulo. Éstas habrían aceptado algunas reivindicaciones de la facción criminal sobre suspender la dispersión de sus líderes y su traslado a prisiones de alta seguridad. Hay que decir que el PCC también tenía mucho interés en cierto retorno a la calma: el narcotráfico y las actividades conexas de robo y de extorsión le reportan, de hecho, unos 270.000 euros al mes, y una atmósfera de guerra civil permanente no resulta favorable para los negocios.

No era, sin embargo, la primera demostración de fuerza del PCC. En enero de 2001, una «megarebelión» organizada por veintinueve cárceles y también coordinada por teléfono móvil, revelaba la potencia de la organización. Se considera que el PCC apareció en 1993 en la cárcel de Taubaté, en el Estado de São Paulo, para protestar contra las condiciones inhumanas de encarcelamiento de sus miembros y vengar la masacre de la central de Carandirú, el mayor establecimiento penitenciario de Sudamérica (hoy derribado). En octubre de 1992, la intervención del batallón de choque de la policía militar, que entró para controlar un motín de 10.000 detenidos, provocó la muerte de 111 de ellos. Esta represión

sangrienta, tras la cual ningún policía fue sancionado, inspiró la película *Carandirú*, de Héctor Babenco, presentada en Cannes en 2003.

La policía estima que los miembros plenos del PCC son cerca de 130.000 personas. Son los «hermanos integrados» que pagan a la organización una cuota mensual que va desde 25 reales (unos 9 euros) para los detenidos en régimen de alta seguridad hasta 500 reales (181 euros) para los «soldados» que viven en libertad. A lo que hay que añadir las contribuciones que se piden a las familias. Según Joao Rinaldo Machado, presidente del Sindicato de Trabajadores penitenciarios de São Paulo, «eso suma tal vez más de un millón de reales mensuales (cerca de 364.000 euros)». Este presupuesto le permite al PCC controlar desde la cárcel el tráfico de drogas, la compra de armas, los secuestros y otras actividades delictivas, pero también fletar autobuses destinados a las visitas de las familias, distribuir alimentos entre los detenidos, organizarles fiestas o comprar juguetes a sus hijos.

La revuelta del PCC no ha sido la única crisis grave de seguridad pública que enfrentó Brasil durante el primer mandato de Lula. A finales de febrero de 2003, cuando el nuevo presidente apenas se había instalado en el palacio del Planalto, el Comando Vermelho —el equivalente del PCC en Rio de Janeiro— promovió una «huelga armada» al estilo de las FARC colombianas, obligando a los comerciantes a cerrar sus negocios durante un día en vísperas de carnaval. Después, los narcotraficantes organizaron a lo largo de varios días en las calles de Rio una verdadera demostración de fuerza que se saldó, entre otros, con el incendio de treinta y siete autobuses y la explosión de dieciocho granadas, cócteles molotov y otros artefactos artesanales en distintos puntos de la ciudad, como la famosa playa de Ipanema.

Tres años más tarde, en marzo de 2005 y como señal de protesta contra una campaña anticorrupción dentro de la fuerzas del orden, un reducido grupo de policías corruptos ametralló a la vista de todos a treinta civiles inocentes en los barrios pobres de Nova Iguaçu y Queimados, en la periferia de Rio. Entre las víctimas, negros y mulatos en su mayoría, se contaba un niño de siete años y varios adolescentes. Este crimen atroz recuerda mucho la matanza de la favela de Vigário Geral en 1993, cuando la policía asesinó a 21 civiles elegidos al azar en represalia por el asesinato de oficiales implicados en el tráfico de drogas en el mismo sector. También en 2005, frente al recrudecimiento de los combates mortales en los barrios controlados por las bandas de traficantes, el gobernador

de Rio pidió la intervención del ejército, que le fue negada. Lo cual no impediría que las tropas federales invadieran varias favelas algunos meses más tarde, en marzo de 2006, para recuperar armas robadas a los militares. Ante esta oleada de violencia, el gobierno petista parece tan impotente como sus predecesores y como los gobernadores locales.

Reflejos autoritarios y bloqueo institucional

La receta tradicional de la izquierda contra este tipo de violencia es har-to conocida: para detener o al menos frenar la matanza, ante todo hay que reducir las desigualdades. Si la situación no ha mejorado e incluso ha empeorado con Lula es porque no ha ido ni demasiado lejos ni demasia-do rápido. El antropólogo Luiz Eduardo Soares no está enteramente de acuerdo con este punto de vista. Militante veterano del Partido Comu-nista, luego del PT (que abandonó en 2003), y antiguo secretario de Seguridad del Estado de Rio de Janeiro, su diagnóstico es tajante: las causas sociales de la criminalidad masiva son patentes, pero para que dis-minuya no basta esperar sencillamente que se instaure un nivel satisfac-torio de reducción de la pobreza y de las desigualdades. El miedo y la violencia destruyen el tejido social de los barrios populares y hay que atacar a fondo el problema desde hoy mismo recurriendo a medios de prevención inteligentes y concertados y a una represión controlada y humanizada, sin hacer concesiones a las fantasías autoritarias heredadas de la dictadura.

No hay soluciones milagrosas y los problemas objetivos y subjetivos son enormes. Así, la idea de legalizar la venta de droga, que está lejos de resolver todos los problemas, aunque ayudaría a reducir considerable-mente la violencia ligada al tráfico y a la corrupción policial, es mencio-nada sólo por algunos investigadores expertos en seguridad pública y militantes de los derechos humanos. Se sabe que existen políticos, en particular dentro del PT, que se declaran favorables a la legalización en privado, pero es prácticamente imposible mencionarlo abiertamente frente a una opinión pública que cada vez más exige soluciones autorita-rias y que sueña con una gran campaña de exterminio —en sentido lite-ral, a veces— de la delincuencia. «Cuando publico en la prensa paulista una tribuna libre contra la tortura y los excesos policiales, o bien a favor de los detenidos —me explica el jurista y defensor de los derechos huma-

nos Oscar Vilhena— la mayoría de cartas que me envían los lectores claman su indignación por mi “simpatía” hacia los delincuentes. La lucha a favor del respeto a los derechos humanos no tiene prácticamente ninguna base social: el 74 % de los habitantes de São Paulo declaran que no son hostiles a que se torture a los delincuentes. De hecho, la tortura se practica ampliamente, incluso contra adolescentes dentro de los centros de detención de la tristemente famosa y mal llamada Fundación para el Bienestar del Menor de Edad (FEBEM). Así es como llaman a las cárceles para delincuentes juveniles en el Estado de São Paulo, donde en los últimos años las revueltas y masacres se han convertido en moneda corriente.»

El fracaso humillante del gobierno de Lula en el referéndum del 23 de octubre de 2005 sobre la prohibición de la venta ilegal de armas de fuego es otro ejemplo del peso de los reflejos autoritarios y del aislamiento de la izquierda en este tema. La iniciativa, que salió ampliamente favorita en los sondeos y tenía el apoyo de un amplio espectro de fuerzas sociales, así como de la Iglesia católica y de los representantes de las Naciones Unidas, en pocas semanas sucumbió ante la propaganda del *lobby* del armamento, que supo cambiar la opinión de dos tercios del electorado a su favor. Para Denis Mizne, del grupo pacifista *Sou da Paz*: «No perdimos porque los brasileños amen las armas. Perdimos porque la gente no confía ni en el gobierno ni en la policía». Otros señalan que el *lobby* de las armas, inspirándose directa y profusamente en la propaganda de la *National Rifle Association (NRA)* estadounidense, logró convencer a millones de brasileños —que en su mayoría no tienen la intención de comprar arma alguna— de que, en abstracto, el derecho a llevar un arma era un derecho cívico fundamental.

Para reformar el sistema penal, en primer lugar convendría resolver lo que el secretario general de la Presidencia de la República, Luiz Dulci, llama «un siglo de fragmentación federativa», confesando el escaso progreso alcanzado por el gobierno en la materia. La institución policial brasileña es una de las más perversas del mundo, aun cuando muchas policías latinoamericanas se le parecen mucho. La llamada policía «militar», cuyos 350.000 hombres no dependen del ejército sino de los gobernadores (es decir, del sector más conservador del *establishment* político), está dividida en veintisiete unidades completamente autónomas, una por cada estado. El grado de coordinación de las policías militares con la policía «civil» —una especie de policía judicial no menos fragmentada—

es mínimo. La misma ausencia de coordinación prevalece con la policía federal, equivalente del FBI estadounidense, que cuenta con apenas unos miles de hombres. El gobierno de Lula, no obstante, ha aumentado considerablemente su presupuesto, equipamiento y número de efectivos, que ha pasado de 9.000 a cerca de 15.000 hombres y mujeres.

Pero los problemas no se reducen a la fragmentación y a la ausencia de coordinación. Las patologías de las policías brasileñas son bien conocidas: torturas sistemáticas en las comisarías, corrupción generalizada y participación frecuente en el tráfico de armas y de drogas, en particular en Rio de Janeiro. Estas prácticas suelen dar lugar a «campañas de saneamiento», generalmente sin continuidad. También de los gobernadores depende un sistema carcelario superpoblado y en ebullición casi permanente, con 350.000 detenidos en 2006 —144.000 de los cuales sólo en el Estado de São Paulo— contra 150.000 en 1994. «Imagine que un gobernador tuviera veleidades reformistas. La policía o los guardias penitenciarios se encargarán rápidamente de quitarle las ganas provocando acontecimientos “disuasivos” en pleno período preelectoral: incidentes graves, estadísticas desastrosas del nivel de delincuencia y hasta oportunas revueltas de presos», subraya Oscar Vilhena.

Para promover una reforma eficaz frente a semejante capacidad de obstrucción institucionalizada, se necesitaría en Brasilia un mandatario dotado de un coraje político inquebrantable, de recursos económicos sin precedentes y de una autoridad incuestionable, además de una capacidad excepcional de negociación con los poderes locales y las instituciones policiales. Ningún gobierno ha logrado hasta la fecha reunir estas condiciones casi milagrosas. El programa de Lula en 2002 preveía la ejecución de un Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP), que supuestamente avanzaría progresivamente hacia la unificación, la moralización y la excelencia profesional de los organismos de prevención y de represión, así como hacia un mayor respeto a los derechos humanos.

Luiz Eduardo Soares fue precisamente uno de sus inspiradores, razón por la que fue designado para encabezar la Secretaría Nacional de Seguridad Pública —una especie de Ministerio del Interior— durante los primeros diez meses del mandato de Lula. No ahorra las críticas a sus antiguos coidearios del PT: «La creación del SUSP formaba parte del programa de gobierno del presidente Lula. Este plan definía un cierto número de exigencias relativas al funcionamiento de los distintos cuerpos de policía y del sistema penitenciario. Se trataba de garantizar el

control, la calidad y el respeto de los profesionales de la seguridad —revalorización, formación y entrenamiento de buen nivel— para reducir el grado de corrupción y de brutalidad que impera en este sector. Tenía que pasar ante el Congreso para que se tradujera en una legislación concreta. En 2003 negociamos con todos los gobernadores y todos aceptaron la idea del SUSP. Para ello se crearon gabinetes de gestión integrados en los veintisiete Estados de la federación. Pero todos terminaron languideciendo y desapareciendo por el efecto de la inercia reinante. Lamentablemente, el gobierno de Lula renunció a reformar la seguridad pública y sustituyó su plan de seguridad, que era audaz y coherente, por acciones e intervenciones de la policía federal —a veces buenas, a veces sólo espectaculares y destinadas a producir un impacto mediático».

«Políticamente, Lula prefirió apostar por acciones de la policía federal para crear una cortina de humo y dejar al SUSP dormido en un cajón. No es que existieran divergencias entre él y yo sobre el tema. Lo que pasa es que los asesores del presidente le dijeron que si él asumía el liderazgo de la reforma de la seguridad pública se convertiría en el blanco de acusaciones y de críticas permanentes tan pronto surgiera algún problema en este campo. El presidente Lula optó entonces por dejar esta bomba de relojería en manos de los gobernadores para no exponerse al riesgo, tal y como lo hicieron los gobiernos anteriores. Hubo una renuncia efectiva a desarrollar una política federal de seguridad pública. El presidente prefiere decir banalidades del tipo: “Si el pueblo brasileño hubiese sido educado adecuadamente hace veinte o cuarenta años, hoy la situación sería distinta”. ¡Por favor! Y si Adán y Eva no hubiesen cometido el pecado original, todo iría mucho mejor ahora...»

¿«Paz y amor» contra «minoría blanca perversa»?

Luiz Eduardo Soares tiene razón: la cuestión de la seguridad es una bomba de relojería para cualquier proyecto de transformación de la sociedad brasileña, sea cual sea. Sin embargo, a corto plazo no es el gobierno de Lula el que más se ha resentido de la semana de pesadilla que vivió São Paulo en 2006, aunque algunos políticos de la oposición no vacilaron en sugerir sin avergonzarse que existían vínculos directos de complicidad entre el PCC y el PT. En virtud de la «fragmentación federativa» del sistema policial, la seguridad en la metrópoli paulista era enteramen-

te responsabilidad del gobernador interino del Estado, Claudio Lembo (PFL). Resulta que Lembo sustituía en este puesto al candidato a la Presidencia designado por la oposición, Geraldo Alckmin (PSDB), que había dirigido los destinos del Estado de São Paulo desde 2001, después de haber sido vicegobernador a partir de 1994. En una explosiva entrevista concedida el 18 de mayo al diario *Folha de São Paulo*, el gobernador interino dio rienda suelta a su ira, considerándose cobardemente abandonado por los dirigentes de la oposición durante la crisis.

Con amarga ironía, Lembo señalaba que Alckmin le había llamado por teléfono únicamente en dos ocasiones y el alcalde de São Paulo, José Serra (otro miembro del PSDB) ni una sola vez, al igual que Fernando Henrique Cardoso: «Es normal. Las comunicaciones telefónicas son tan caras». Denunciaba las raíces profundas de la crisis de seguridad en unos términos dignos de un militante de la ultraizquierda: «Brasil está completamente desintegrado. Hay que recomponer la sociedad. La cuestión social es extraordinariamente grave. En lo único en que Brasil cree es en la camiseta de su equipo de fútbol, símbolo de victoria. Pero es un país que sólo ha conocido derrotas. Derrotas sociales... Nuestra burguesía es execrable, es una minoría blanca sumamente perversa. No hay nada más dramático que las entrevistas que concedieron el miércoles pasado a la *Folha* [representantes de la alta sociedad, artistas, empresarios y distintas celebridades]. Desde sus lujosas residencias dicen que bajarán a las calles para protestar (contra la violencia y la inseguridad). ¿Protestar? ¡Por favor! Irán al mejor restaurante de cinco estrellas y se van a pegar una buena cena al lado de otras figuras de la política brasileña. Nuestra burguesía debería cerrar la boca y reflexionar seriamente sobre lo que ha hecho por este país. Brasil es el país de la hipocresía. Durante la Inquisición, de 1500 a 1821, se mantenía un comportamiento para el exterior, para la calle, y otro comportamiento dentro de las paredes de la casa. Y así continúa hasta ahora. Esa gente habla sólo para la galería».

»El cinismo nacional está matando a Brasil. Lo que he leído (en las entrevistas publicadas en la *Folha*) es el parloteo empalagoso de algunas señoronas burguesas de São Paulo. Hay que ver la cantidad de estupideces que dice esa gente. Ah, en público son unos angelitos, pero por detrás explotan a la sociedad, explotan a sus criados, explotan todos los servicios públicos. Quieren estar siempre en el entorno del poder porque esperan sacar beneficios. La burguesía va a tener que abrir su cartera para remediar la miseria social de Brasil, promover el empleo, la edu-

cación, la solidaridad, el diálogo y la reciprocidad. Si no conseguimos cambiar la mentalidad brasileña, el corazón de la minoría blanca brasileña, no llegaremos a ningún sitio.»

Podemos imaginar la estupefacción de los jefes del PFL y del PSDB, así como de los *beautiful people* de la elite paulista al leer esta diatriba. Cuando Chávez o Morales pronuncian este tipo de discursos, todos los comentaristas autorizados los califican de «populistas cargados de odio». El mismo Lula rara vez se muestra tan agresivo y el discurso de la polarización social apenas formó parte de su repertorio durante su primer mandato. Sin embargo, las acusaciones de «populismo» contra él son cada vez más frecuentes e intensas, y arrecian tanto desde la derecha como desde la izquierda.

Dichas críticas suelen apoyarse sobre una realidad sociológica innegable, que probablemente continuará siendo una de las dinámicas más acuciantes de la «era Lula». Hasta su acceso al poder, el voto a favor del PT y de Lula —aunque ambos no coinciden por entero— nunca fue estrictamente hablando un voto de los «pobres». Su núcleo duro estaba tradicionalmente constituido por los electores de la clase obrera organizada y por las clases medias ligadas a la función pública y residentes en las metrópolis del sur del país. Pero como hemos visto, el «lulismo», sin perder todas sus bases tradicionales pese a la erosión debida a la crisis y al desgaste del poder, está convirtiéndose en un fenómeno cada vez más plebeyo, nordestino y arraigado en las aglomeraciones de tamaño pequeño y mediano.

El director del Ibope, uno de los principales institutos de sondeo, describe como sigue la increíble resiliencia del presidente brasileño: «Lula y su gobierno se han visto sometidos a un acoso mediático sin precedentes en la historia de la Presidencia de Brasil. Sin embargo —añade Augusto Montenegro— la ecuación personal del líder metalúrgico parece más fuerte que todas las campañas denigrantes». «Ha creado la mayor central sindical de América Latina, uno de los mayores partidos de la región y, pese a venir de una de las capas más pobres de la población, de una familia de *pau-de-arara*,⁸ ha llegado a ser presidente. El simbolismo de esta trayectoria es muy poderoso y sin duda todavía somos incapaces de calibrar su dimensión. Cuando subió a la carroza de la reina de Ingla-

8. Literalmente: «percha de loro». Camión rudimentario que transporta a los emigrantes del Nordeste hacia el sur del país.

terra (durante una visita diplomática), el pueblo entero, todo el Nordeste, subió con él.» Su colega Marcos Coimbra, del Instituto Vox Populi, opina algo parecido: «El lulista y el lulismo son un retrato casi perfecto de la población brasileña; con algunas excepciones, se parecen a un corte transversal de la sociedad brasileña».

Este sería, por lo tanto, el auténtico secreto de la fórmula de Lula: «*Lulinha paz e amor*»⁹ contra la elite «blanca y perversa», el cambio paulatino dentro de una continuidad relativa; la buena voluntad contra la mala fe conspiradora; el lento despertar del gigante Brasil, gigante afable y sonriente que, pese a la enormidad de los obstáculos con que tropieza en su camino y las injusticias que padece, no pierde nunca su jovialidad y su serenidad naturales, como el propio presidente. Lula siempre insiste en su tranquilidad frente a las agresiones, se enorgullece de nunca perder los nervios, como en su discurso de Olinda (citado al inicio del capítulo) o en una entrevista a *Carta Capital* en diciembre de 2005: «De vez en cuando, constato el estado de nerviosismo de algunas personas a las que hace tiempo pude considerar mis amigos y que ahora están sumamente nerviosos, sumamente irritables. Todas esas personas apostaron por un completo y sonoro fracaso de mi gobierno. No ocurrió así y por eso están bastante nerviosos. Yo no me puedo permitir estar nervioso. Soy el presidente de la República, tengo que mantenerme siempre sereno, siempre tranquilo».

Una serenidad algo exagerada que, sazónada con algún sollozo comunicativo, parece dar sus frutos, según confirma Ludmila, una asistente social entrevistada por dos periodistas españolas: «El pueblo brasileño es un pueblo generoso. No es un pueblo airado, aunque exista mucha violencia en las calles. No somos airados; por eso, cuando Lula hablaba con ira en las tres primeras ocasiones anteriores en las que se presentó, no lo votamos». ¿Cuántas veces he oído frases parecidas? Esta recaída en la teoría del carácter nacional es un poco humillante para la autoestima intelectual de un periodista con veleidades de sutileza sociológica y, sin embargo... A menudo, al azar de los encuentros en los autobuses o en los cafés me ha sorprendido el contraste entre la increíble dulzura, la increíble amabilidad, suavidad diría incluso, de los brasileños, especialmente de las capas populares, y la atroz crueldad que asola las periferias urbanas de este país diezmando a su juventud. Los estra-

9. Eslogan de la campaña de 2002.

gos del machismo son innegables y la dominación patriarcal está lejos de ser un recuerdo del pasado en Brasil, pero la masculinidad brasileña suele tener a veces una tonalidad sutilmente distinta, mucho menos agresiva que en los países hispanohablantes, hasta el punto de que algunos gestos y algunas maneras de expresarse o de transmitir sus emociones podrían ser tachados como sexualmente ambiguos por varones de otros países.

La infinita paciencia del compañero Lula

Sin mencionarle los juicios de Ludmila o mis impresiones algo confusas, pregunto al respecto a Ricardo de Azevedo, vicepresidente de la Fundación Perseu Abramo y coordinador editorial de la revista *Teoria e Debate*. Ricardo es un simpático cincuentón de barba semicana que estuvo exiliado en Francia, como muchos de sus compañeros expulsados por la dictadura militar. Me confirma que uno de los problemas de imagen de Lula durante sus tres primeras tentativas electorales fue precisamente una agresividad aparentemente excesiva: «Lula siempre ha tenido una cierta desventaja entre las electoras en general, y en particular aquellas de las capas populares, una desventaja que hasta ahora le cuesta superar, pese a que la percepción que las brasileñas tienen de él ha mejorado. En los años ochenta y noventa, no querían por marido a este sindicalista desaliñado y gritón».

Esta dulcificación no gusta a todos y algunos, tanto en los movimientos a la izquierda del PT como dentro de las filas partidistas o entre sus simpatizantes críticos, lo consideran el símbolo de la capitulación y de la renuncia ideológica. ¿«*Lulinha paz e amor*»? Lamentable falta de combatividad, «conciliacionismo», colaboración de clase teñida de populismo de baja estofa, propagan los rumores radicales.

Pero los brasileños más pobres en su mayoría no lo ven de esa manera. En el fondo, si Lula proyecta una imagen bastante diferente de Chávez, que suele manifestar una agresividad petulante contra sus enemigos —aunque el registro evangélico o el sentimentalismo bonachón son también características del presidente venezolano, que maneja con virtuosismo una extensa gama de recursos retóricos y emocionales (véase el capítulo 2)—, el resultado es similar: una misma identificación con el *ethos* profundo de las capas populares, una misma cohesión simbólica con el

pueblo, al que se percibe como fundamentalmente sano y lleno de sensatez frente a una oligarquía biliosa y malintencionada. Con la diferencia adicional de que Brasil es demasiado grande y está demasiado seguro de su grandeza («*o melhor país do mundo*» es la opinión común, que repite a menudo desde el *favelado* al gran empresario) para que su líder caiga en la tentación de buscar enemigos externos y de estimular un nacionalismo beligerante o crispado.

«Por supuesto —continúa Ricardo— si se quiere se le puede llamar “populismo”, como hacen los medios de comunicación de la oposición y una cierta politología conservadora, que ha convertido este término en un cajón de sastre para denigrar todo lo que le disgusta en los excesos de exuberancia plebeya de las democracias emergentes. Pero no olvidemos que en Latinoamérica, el “populismo” es con frecuencia la forma misma y la condición previa para el inicio de una verdadera inclusión ciudadana.» Un inicio muy lento, muy trabajoso, frente a una montaña de injusticias: desigualdades extremas, violencia homicida que afecta ante todo a los más pobres, trabajo esclavo, subempleo, y el infinito sufrimiento de todos aquellos a los que no se les ofrece siquiera una oportunidad de producir frente a los beneficios espectaculares de quienes se contentan con especular. Dan ganas de decir: quien tiene hambre tiene prisa, no hay tiempo de esperar que «las condiciones macroeconómicas se hayan estabilizado» o que «la vulnerabilidad externa se haya reducido», incluso si ahora a los pobres se les echa más migajas del pastel que antes. «Quien tiene prisa se come el guiso crudo», responderá Lula.

¿Hay que admirar este constante apelar al repertorio retórico de la sabiduría popular o verlo como la respuesta de un político demasiado hábil que usa y abusa de sus raíces plebeyas? ¿Es esa una respuesta digna de un hombre de izquierdas? «Ustedes saben que nunca me ha gustado proclamarme un hombre de izquierdas —afirma Lula—. Soy un mecánico tornero y he llegado a la Presidencia gracias a una infinita paciencia. No necesito ser de izquierdas para luchar por la igualdad, [pero] si la gran definición de la izquierda es luchar por la igualdad, no hay nadie más a la izquierda que yo en el mundo. La verdad es que yo lucho para que todos puedan beneficiarse de lo que la nación produce. Y creo que es posible. Cuando a lo largo de su historia un país nunca se preocupó de los problemas sociales, y en las últimas décadas sufrió veinte años de atrofia, un país con 54 millones de personas que viven por debajo del

umbral de la pobreza, es fácil entender que es imposible superar esta situación en poco tiempo. Es preciso construir cimientos sólidos para llegar al objetivo final.» Al dar una segunda oportunidad a Lula, el futuro dirá si los nuevos cimientos de la morada Brasil son verdaderamente sólidos.